

Documento de trabajo 11/2020
12 de junio de 2020



La(s) geografía(s) de la violencia guerrillera en Colombia 2012-2020

Jerónimo Ríos Sierra



La(s) geografía(s) de la violencia guerrillera en Colombia 2012-2020

Jerónimo Ríos Sierra | Investigador postdoctoral “Atracción de Talento CAM 2018”,
Universidad Complutense de Madrid | @Jeronimo_Rios_

Índice

Resumen	2
1. Introducción	3
2. La geografía y el estudio de la violencia	5
3. Una violencia en proceso de “periferialización”: el conflicto armado antes del diálogo de paz con las FARC-EP	9
4. Poniendo en valor la tesis de la narcotización del activismo guerrillero: la violencia guerrillera durante el Acuerdo de Paz con las FARC-EP	14
5. La violencia en Colombia tras el Acuerdo de Paz con las FARC-EP	25
5.1. La expansión de los grupos post-paramilitares	27
5.2. El ELN se recompone tras la desaparición de las FARC-EP	29
5.3. El EPL consigue salir de la región del Catatumbo	30
5.4. Disidencias y nuevas estructuras heredadas de las FARC-EP	31
Conclusiones	33
Referencias bibliográficas	35

Resumen¹

El siguiente trabajo describe las dinámicas de la violencia guerrillera en Colombia por parte de las FARC-EP y el ELN antes, durante y después del Acuerdo de Paz suscrito con la primera de las guerrillas en 2016. De este modo, se trata de poner en valor cómo la presencia territorial de ambos grupos armados se redefinió bajo una fuerte impronta periférica y una mayor dependencia cocalera, características que responden a un paulatino proceso de debilitamiento acontecido, sobre todo, entre 2002 y 2012. Asimismo, se muestra la resignificación y la intensificación de la violencia en la actualidad, resultado de un [proceso de implementación del Acuerdo de Paz](#) con muchas dificultades, en donde los nuevos protagonistas en el fondo responden a las mismas lógicas tradicionales, operando en los mismos territorios que cuando existían las FARC-EP. Cabe afirmar que en todo este proceso es extensible a terceros grupos armados que siguen evidenciando cómo la “periferialización” de la violencia y la dependencia del negocio cocalero siguen vigentes. Por ello, resulta imprescindible que el Estado

¹ Este trabajo es resultado del proyecto 2018-T2/SOC-10508, cofinanciado por la Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid.

colombiano encuentre los instrumentos necesarios para una orientación distinta de sus políticas públicas y de su particular agenda de seguridad; de lo contrario no es posible controlar este escenario de violencia y disfrutar de los beneficios de la paz, ya que los condicionantes directos, estructurales y simbólicos que los provocaron, continúan irresolutos.

1. Introducción²

El siguiente trabajo tiene como objetivo mostrar la(s) geografía(s) de las diferentes violencias guerrilleras acontecidas en Colombia entre el año 2012 y 2020. Se pretende mostrar cómo antes, durante y después del Acuerdo de Paz, suscrito en noviembre de 2016 con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP), las dinámicas de la violencia y los enclaves territoriales presentan importantes visos de continuidad. Así sucede en el departamento de Antioquia, en el nororiente del país –especialmente en Arauca y Norte de Santander– y en Caquetá, Cauca, Nariño y Putumayo –en el suroccidente colombiano–.

Además, el vacío de poder dejado por las FARC-EP tras su desmovilización en 2017 ha abierto una ventana de oportunidad que, lejos de traducirse en un control territorial por parte del Estado, ha sido aprovechada por diferentes actores armados. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y diferentes grupos disidentes de las FARC-EP, así como estructuras post-paramilitares, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (llamadas por el gobierno Clan del Golfo), han experimentado dinámicas de expansión territorial que alimentan un nuevo mapa de actores, bajo una geografía de la violencia no tan nueva (Fundación Ideas para la Paz, 2019).

El actuar de todos estos grupos, en el escenario de violencia en Colombia permite entender de qué manera, las dificultades del Estado para controlar todo su territorio y, asimismo, la importancia de los réditos del negocio cocalero, son variables centrales para comprender por qué, una vez firmado el Acuerdo de Paz con las FARC-EP, los remanentes de violencia, lejos de reducirse, se han intensificado (Nussio, 2020). Expresado de otro modo, y como se podrá ver en estas páginas, llevar la institucionalidad al conjunto del territorio y, asimismo, reducir el impacto de la droga sobre la violencia, son prioridades aún irresolutas hoy para el Estado colombiano.

El trabajo se estructura en tres partes claramente diferenciadas. En primer lugar, se presenta un marco teórico relacionado con la lectura que la geografía política propone para escenarios de conflictos armados como el colombiano. Y es que una afirmación de partida que subyace en este trabajo es la de reconocer que el Estado, generalmente, ha adolecido de más territorio que soberanía, en tanto que su capacidad institucional se ha desarrollado, a lo largo de las décadas, de una forma tan deficitaria como irregular (Oquist, 1978; Sánchez, 1987; Ramírez, 1990; Acemoglu y Robinson, 2012). Esta razón, desde los años 80, ha permitido a los grupos guerrilleros y paramilitares consolidar distintas fuentes de poder social y estrategias de legitimación con las que erigirse como

² Se agradecen los comentarios enriquecedores que, a la primera revisión, realizó la profesora Sonia Alda Mejías.

actores hegemónicos en clave local y “responsables” de la organización económica, política y militar del territorio (Arjona *et al.*, 2015; Arjona, 2016). Con base en lo anterior es esta inaccesibilidad de ciertos escenarios de Colombia, sobre todo desde finales de la primera década de los 2000, coincidente con la preeminencia de enclaves cocaleros, selváticos, montañosos y fronterizos que fueron subterfugio idóneo para proseguir con la “lucha armada”.

Una vez presentados algunos de los conceptos y aspectos teóricos más relevantes, y revisada la literatura reciente que atiende a la mirada espacial y territorial de la violencia en Colombia, se aborda la geografía de ésta, observando tres momentos diferentes pero relacionados entre sí de la historia reciente del conflicto armado. Esto, con el objetivo de mostrar cuál ha sido el significado y el alcance de la violencia de las FARC-EP y del ELN durante los último ocho años.

Se inicia observando el período previo al Acuerdo de Paz para dar cuenta cómo, una vez que éste comienza, se aprecia una desescalada notable de la violencia, especialmente visible en 2015. Sin embargo, resulta igualmente llamativo cómo, con la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, se agudizan nuevamente los niveles de confrontación. Una confrontación que, en cualquier caso, viene determinada por su acuciante desarrollo en escenarios periféricos, fronterizos y cocaleros, en donde las FARC-EP, y ahora sus disidencias, y también el ELN, han experimentado una importante capacidad de arraigo.

Lo anterior, en tanto que las cifras de la violencia especialmente entre 2018 y 2020 evidenciarían un deterioro del orden público, haría valer la hipótesis que Johan Galtung proponía en su trabajo clásico, publicado en 1969 y de referencia en la investigación para la paz y la resolución de conflictos. La paz no llega cuando se termina la violencia sino, todo lo contrario, cuando son superados los condicionantes estructurales, culturales y simbólicos que abonaron esa violencia (Galtung, 1969). He aquí la deuda pendiente de Colombia.

Este trabajo cerraría con unas conclusiones que sirven como corolario del argumentario planteado, ahondando en la vigencia de un objeto de estudio que aún hoy ofrece inconmensurables posibilidades de análisis e interpretación. Queda añadir que, metodológicamente, éste es un trabajo exploratorio y descriptivo, pues su objetivo es el presentar la correspondencia y la continuidad de las geografías de la violencia antes, durante y después del Acuerdo de Paz. Lo anterior, con especial énfasis en las FARC-EP y en el ELN, pero extensible a otros grupos armados, y con la intención de hacer evidente cómo estas dos guerrillas han experimentado un proceso constante de “periferialización” de la violencia y de dependencia del negocio cocalero. Así, esto conectaría a su vez con una de las principales hipótesis de un trabajo académico desarrollado ampliamente en los últimos cinco años (Ríos, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020).

Otros aspectos como el arraigo paramilitar, la minería ilícita y la debilidad institucional, intencionadamente, han sido dejados de lado y aparecen tangencialmente, si bien deben ser necesariamente atendidos en una mirada integral del fenómeno. Por otra parte, la gran mayoría de las cifras y buena parte de los mapas que aquí se presentan

fueron facilitados *exprofeso* por el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (ODHDIH) que hasta 2014 estaba adscrito a la vicepresidencia de la República. Este ODHDIH se nutrió durante años de los boletines diarios que reportaban el Departamento Administrativo de Seguridad (1998-2010) y el Comando General de las Fuerzas Militares (2011-2015). En la actualidad se trata de una fuente de altísimo valor para entender la intensidad de la violencia en Colombia, aunque su acceso es restringido y está sometido a derechos de petición no siempre resueltos favorablemente.

2. La geografía y el estudio de la violencia

Durante las últimas dos décadas han proliferado las miradas espaciales de la violencia, más allá de los estudios militares o de seguridad, de forma que la geografía política y la investigación para la paz y la resolución de conflictos han aportado interesantes herramientas conceptuales con las que comprender las dinámicas territoriales de los conflictos armados.

Es posible encontrar análisis espaciales de la seguridad atendiendo a la relación causal con diferentes tipos de población (Raleigh y Hegre, 2009), con base en ciertas condiciones estructurales como la pobreza (Hegre *et al.*, 2011) u observando dinámicas fronterizas (Buhaug y Rød, 2006). Otros trabajos estudian la geografía de la violencia a partir de la concurrencia de recursos “saqueables”, como el gas o el petróleo, (Basedau y Pierskalla, 2013) o con base en la estrecha relación que acontece entre violencia y pluralidad étnica (McDoom, 2014).

Un punto de partida generalizado es asumir que las condiciones demográficas, sociales o culturales que tienen lugar en un determinado territorio influyen, retroalimentan y sustentan los escenarios en donde transcurre la violencia. Es decir, la violencia únicamente es inteligible cuando se interpreta como resultado de las interacciones entre un grupo social y un territorio, lo que desemboca, como sugiere Agnew (1987), en la construcción del lugar. De esta manera, la relación del individuo y su entorno social con el ambiente es lo que conforma un contexto espacial desde el cual dar sentido a la cotidianidad (Agnew, 1987), al significado de las construcciones sociales (Pattie y Johnston, 2000) y a las contradicciones e imbricaciones multiescalares, tan importantes en los conflictos armados (Taylor y Flint, 2002).

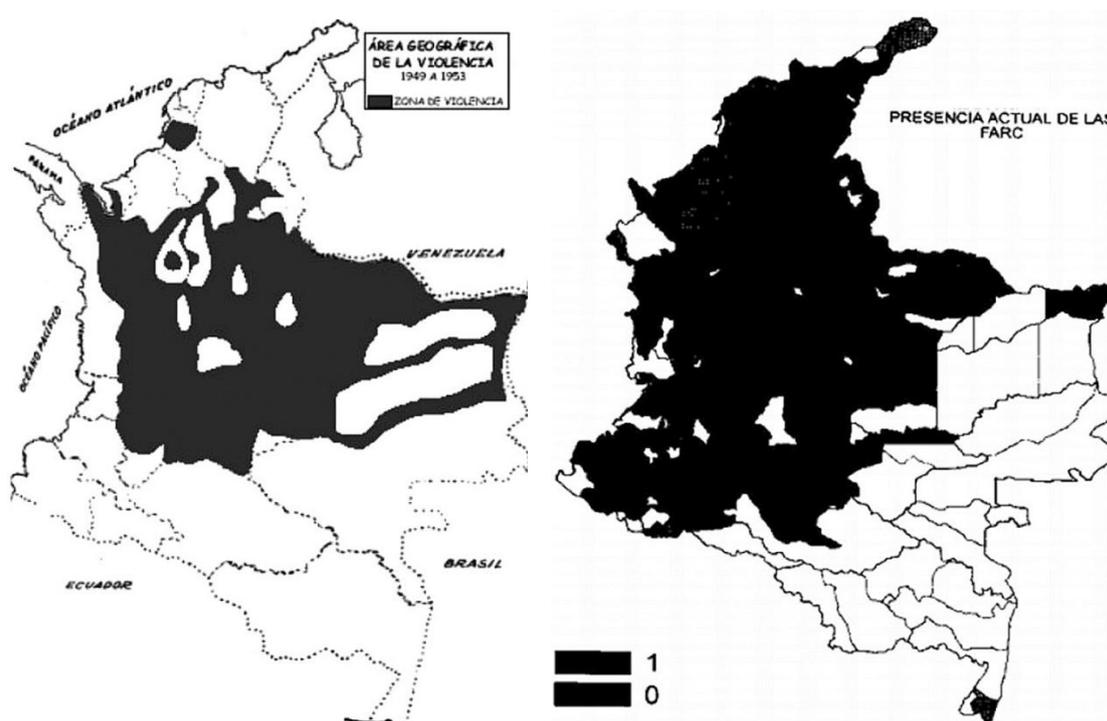
Con base en lo expuesto es que se puede comprender por qué ciertos lugares y no otros se erigen como escenarios de violencia (Zukerman, 2012). Aportaciones como la de Linke y O’Loughlin (2015) arrojan luz sobre cómo la violencia, a partir de la concurrencia de elementos como el orgullo nacional, el capital social, el separatismo o la mayor exposición a la violencia proveniente del “enemigo”, alimentan realidades de confrontación. Realidades en donde la particularidad de la localidad debe resultar problematizada y abordada (Schutte y Donnay, 2014).

Especial atención cobran los escenarios generalmente denominados como “periféricos”, los cuales resultan de difícil accesibilidad, dado su déficit de infraestructura y conectividad, su alejamiento respecto de centros decisorios o fruto de la concurrencia

de condiciones hostiles como espacios selváticos, montañosos y/o fronterizos (Horowitz, 1985; Brancati, 2006; Schutte, 2015). Esta hipótesis, entre otras, es propuesta por Forø y Bahaug (2015), quienes parten de elementos como la distancia con la ciudad, la disponibilidad de corredores y refugios selváticos o montañosos y la brecha sociocultural con los centros políticos y económicos del país (*inaccessibility*) para corroborar la probabilidad de que aparezcan grupos insurgentes.

En términos similares, las aportaciones de Buhaug y Rød (2006), Salehyan (2009) y Cunningham *et al.* (2009) identifican variables como la fractura regional, la ausencia de infraestructura y la presencia de imaginarios distanciados en clave de unidad nacional que favorecen la aparición de grupos insurgentes. Igualmente, es posible entender la ocurrencia y evolución de los conflictos armados, con base en el significado de sus fronteras inestables y permeables (O'Loughlin, 2012), o dada la existencia de comunidades étnicas transnacionales en disputa con la impronta (mono)nacional de un Estado (Cederman *et al.*, 2013). Y es que, como sugiere Snyder (2006), a mayor distancia a los centros decisorios de un Estado y mayor fractura territorial, mayores son las posibilidades de insurgencia, sobre todo, si albergan conflictos étnico-culturales o si existen recursos que nutran de ingresos económicos a los diferentes actores armados.

Figura 1. Representaciones geográficas de la violencia en Colombia

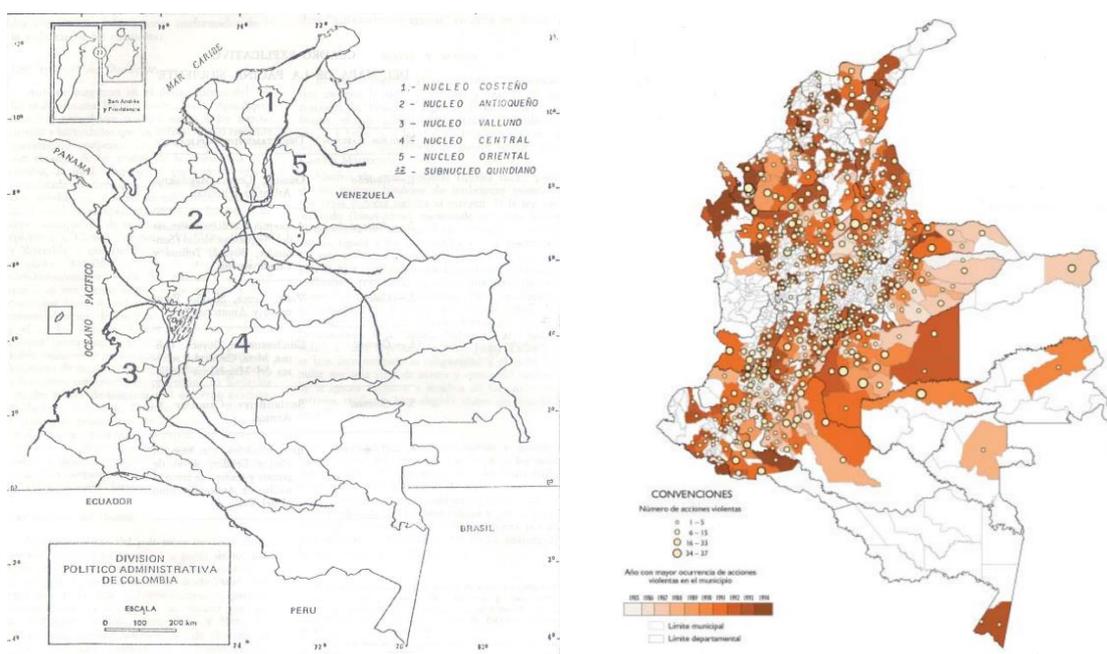


Fuente: izquierda, Fals Borda (1962, pp. 114); derecha, Vélez (2001, pp. 121).

En lo que respecta a Colombia, existe una prolífica literatura centrada en la observancia y análisis de cómo la mirada geográfica explica la evolución del conflicto armado. Ya en el primigenio trabajo de Fals Borda *et al.* (1962) hay un intento por representar por medio de mapas el impacto de La Violencia transcurrida entre el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán y el año 1960. Mapas, en todo caso, que tiñen de negro monocolor, dada la representación de acciones de violencia, a casi dos terceras partes del país.

Aportaciones posteriores, como las de Vélez (2001) y Pécaut (2008), muestran también la evolución territorial de las guerrillas de las FARC-EP y el ELN, si bien la obra de Reyes (con Bejarano, 1988; 1993) es de las primeras en ir más allá de la lectura estructural de la violencia, al analizar la relación violencia/poder/territorio. Con ello, logra poner en valor el componente rural y agrario del conflicto de un modo similar al que, muchos años después, lo hará Zukerman (2012). Igualmente, el mismo Reyes (2009) explicará, también desde una base geográfica, cómo el paramilitarismo conecta con la estructura y el despojo de la propiedad de la tierra.

Figura 2. Representaciones geográficas de la violencia en Colombia

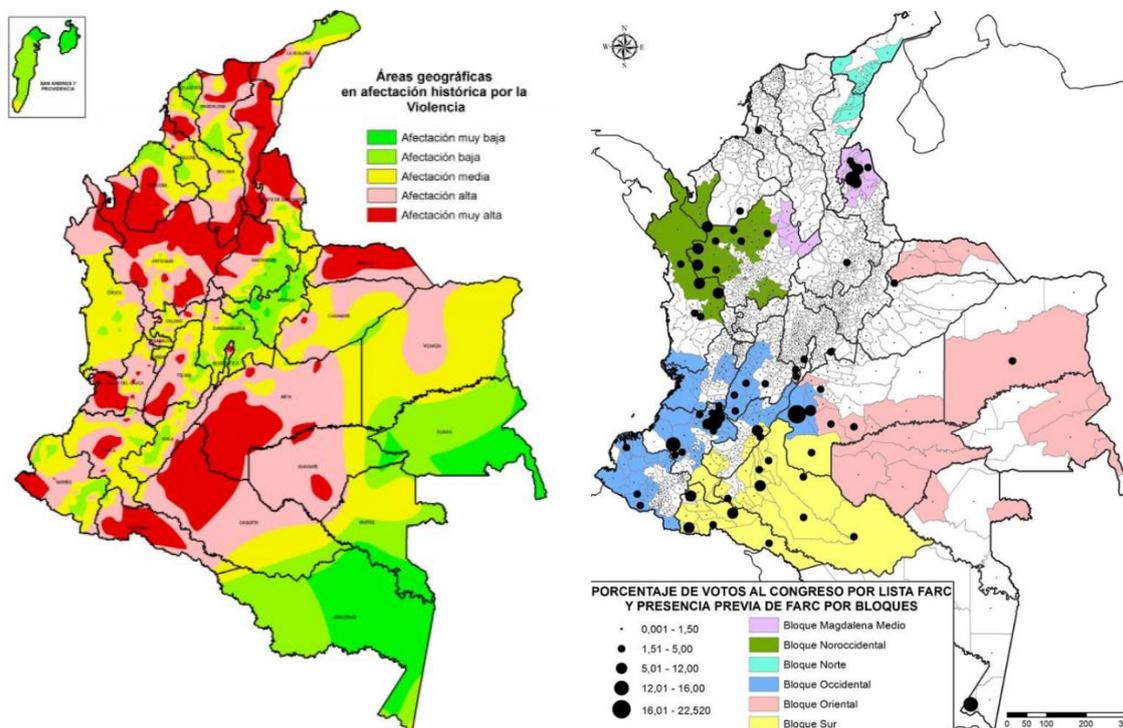


Fuente: izquierda, Betancourt (1991, p. 30); derecha, PNUD (2003, p. 54).

De acuerdo con Pissot y Gouëset (2002), es en los años 90 cuando comienzan las miradas espaciales de la violencia en Colombia de una forma mucho más prolífica. Así sucede con el análisis del activismo narcotraficante del cártel de Medellín (Observatorio Geopolítico de las Drogas, 1996), las diferentes territorialidades del cultivo cocalero (Betancourt, 1991), y los diferentes corredores de contrabando, tal y como representa el trabajo del Consejo Nacional de Estupefacientes (1995).

Fuera de la estricta dimensión de las drogas y su representación territorial, un trabajo de referencia es el del PNUD (2003), en donde se realiza todo un ejercicio de cartografías con las que mostrar el sentido de las acciones guerrilleras de las FARC-EP y el ELN, y de los grupos paramilitares, entre 1985 y 2002. De este modo, se da cuenta de cómo son de permeables frente a la violencia las diferentes regiones del país y cómo operan las brechas territoriales. Brechas y divergencias sociales, económicas, políticas e institucionales que vienen a explicar la geometría asimétrica y variable de la violencia en Colombia.

Figura 3. Representaciones geográficas de la violencia en Colombia



Fuente: izquierda, Salas (2016, p. 52); derecha, Cabrera y Echandía (2019, p. 102).

Desde finales de los años 90 ganan importancia los trabajos de Camilo Echandía, quien, desde la centralidad de los mapas, explica algunas de las dinámicas más significativas del conflicto armado interno. Esto es, las rutas nacionales del narcotráfico (Echandía, 1996) y la relación entre los recursos económicos y los grupos armados (Echandía, 2006, 2008, 2013; Echandía y Cabrera, 2017). De forma similar, el trabajo de Luis Gabriel Salas, geógrafo en su momento del ODHDIH y facilitador de algunos de los mapas aquí utilizados, muestra las tendencias del conflicto con atención a sus corredores estratégicos y a las traslaciones que experimenta la violencia en relación con el cultivo ilícito, explicando así la intensificación de la violencia sobre el litoral Pacífico (Salas, 2010, 2015, 2016, 2019). Finalmente, Jerónimo Ríos, también en los últimos años y con una mirada inscrita en la geografía política, ha abordado la idea de cómo en Colombia las transformaciones territoriales de la violencia han respondido a un doble proceso de “periferialización” de la violencia guerrillera y mayor concentración sobre los enclaves cocaleros y fronterizos del nororiente y suroccidente del país (2016a, 2016b, 2016c, 2017a, 2017b, 2017c).

Quedaría mencionar en esta revisión de la literatura más destacada con respecto a las miradas territoriales del conflicto armado colombiano, las aproximaciones realizadas desde la óptica subregional. En relación con ella, destacan los trabajos de García de la Torre y Aramburo (2011) con relación al Urabá antioqueño y chocoano; de Vásquez (2011), Torres (2011) y Rodríguez Cuadros (2015), sobre los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo, en el suroccidente del país, y las publicaciones de Aponte y Vargas (2011), González (2012), Piña (2012) y Ocampo (2014), focalizados en el nororiente colombiano, en Arauca y Norte de Santander.

En cualquier caso, y tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP también han sido publicados numerosos trabajos que, más que centrarse en la violencia y su relación con el territorio, abogan por atender el fenómeno denominado como “paz territorial”. Lo anterior, a tenor del énfasis que a tal efecto plantea el Acuerdo con la guerrilla (Criado, 2017; Cairo *et al.* 2018; Ríos y Gago, 2018; Estupiñán, 2018; Lederech, 2019; Cairo y Ríos, 2019). No obstante, persisten los análisis de la violencia, entre los que, en los últimos dos años, hay que destacar las contribuciones de Ríos *et al.* (2019), Maher y Thompson (2019), Ballvé (2019) y Lemaitre y Restrepo (2019). Asimismo, los informes de organismos y fundaciones como los de la Fundación Ideas para la Paz (2018; 2019), Indepaz (2017, 2018, 2019), Fundación Paz y Reconciliación (2019, 2019b; 2020) y el mismo Kroc Institute (2017, 2019), sin ser trabajos estrictamente académicos, enriquecen la mirada territorial de la violencia tras el Acuerdo con las FARC-EP.

3. Una violencia en proceso de “periferialización”: el conflicto armado antes del diálogo de paz con las FARC-EP

Entre 2002 y 2010 se intensifica sobremanera la magnitud del conflicto armado interno en Colombia, especialmente, por tres razones (Ríos, 2017). La primera es la política de confrontación por parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez a través de la Política de Seguridad Democrática (PSD) y la militarización del componente de cooperación con EEUU suscrito en 1999 –vulgarmente conocido como el Plan Colombia–. De otra parte, tiene lugar un proceso de escalamiento del conflicto por parte de unas FARC-EP que habían utilizado el diálogo de paz del Caguán (1999-2002) para rearmarse, desdoblarse y avanzar en aras de aspirar a una eventual derrota militar del Estado (Ríos, 2018). En paralelo, el ELN, renuente a cualquier escenario negociador, se halla en un proceso de reacomodo, dada su delicada situación entre un gobierno que debilita su estructura a pasos acelerados, unas FARC-EP con las que mantienen importantes enfrentamientos en Arauca y Nariño, y un paramilitarismo que golpea fuertemente sus bases de apoyo en los escenarios de mayor arraigo como Bolívar, Antioquia y Santander (Echandía, 2013). Y es que este fenómeno paramilitar, institucionalizado en 1997 en torno a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se consolida durante los primeros años del gobierno de Uribe como el actor armado hegemónico de buena parte de la región del Caribe, gracias a sus más de 10.000 integrantes. De esta manera, llegará a debilitar igualmente a las FARC-EP, erigiéndose como protagonista de una violencia de la que será el mayor responsable de los niveles de desplazamiento forzado y masacres, especialmente, entre 1998 y 2004 (Ronderos, 2014).

La presidencia de Álvaro Uribe se caracteriza por acentuar un fortalecimiento de la impronta militar del Estado. Durante todo este tiempo se destina más de un 4% del PIB en seguridad y defensa, de modo que aparte de los 8.000 millones de dólares que invierte el gobierno colombiano, hay que añadir otros 8.000 millones que, aproximadamente, llegan del lado de la cooperación estadounidense hasta el año 2010. Gracias a ello, las Fuerzas Militares experimentan un notable proceso de modernización, organización y coordinación que involucra mayores y mejores recursos, especialmente en aspectos de inteligencia, combate aéreo y combate nocturno. Algo nada baladí, pues entre otras cuestiones facilita la intensificación del número de operativos militares que se despliegan a lo largo de la década (Ministerio de Defensa, 2010).

Colombia se convierte en el cuarto país del continente que más incrementa su presupuesto en seguridad y defensa –sólo superado por Chile, Venezuela y Ecuador–, siendo el que dispone de un mayor número de efectivos por habitante –sólo superado por Bolivia (881 por cada 100.000)–. Igualmente, la Policía Nacional colombiana, entre 2002 y 2010, pasa de 110.000 integrantes a 160.000, y las Fuerzas Armadas hacen lo propio, al aumentar de 203.000 a 270.000 miembros (Ministerio de Defensa, 2011).

De idéntica forma, se desarrolla una importante transformación cualitativa, traducida en la conformación de unidades y batallones especializados, y nuevos criterios de organización, coordinación, distribución y disposición de recursos (Medellín y Rangel, 2010). Producto de lo anterior es que se intensifican hasta niveles nunca experimentados las lógicas de confrontación por parte del Estado.

Si durante la presidencia de Pastrana el promedio de combates de las Fuerzas Militares por año es de algo más de 500, bajo la presidencia de Uribe esta cifra se eleva por encima de los 1.800 operativos en sus ocho años de mandato (ODHDIH, s.f.). La primera evidencia de este cambio en la correlación de fuerzas se puede observar en la operación desplegada contra las FARC-EP a través de la Operación Libertad I, recién llegado Álvaro Uribe al gobierno. Allí se involucran hasta 15.000 militares sobre un escenario de 70.000 km² –que afecta a todo Cundinamarca, el oriente tolimese, el norte de Meta y el suroriente de Boyacá– y que será la antesala de la expulsión de la guerrilla en los enclaves centrales del país. Enclaves a los que, entre 2004 y 2006, se suman también los departamentos del eje cafetero y Santander (Pizarro, 2011).

Lejos de ser un fenómeno puntual, los golpes asestados a la guerrilla resultan continuos a lo largo de toda la PSD. En 2004 es capturado en Quito “Simón Trinidad” y en 2007 se consigue dar de baja a “Negro Acacio”, responsable de los negocios cocaleros de las FARC-EP en Guaviare y Vaupés. También muere “Fermín Caballero”, dirigente del Frente 37 en el sur de Bolívar. Un año después, en 2008, se consigue la baja de “Raúl Reyes” con motivo de la Operación Fénix, la cual implica el bombardeo de su campamento del Frente 29, ubicado en el norte de Ecuador. Casi a la par se sucede la baja de otro líder histórico y miembro del Secretariado como es “Iván Ríos”. Ya en septiembre de 2010, con Juan Manuel Santos como presidente, y en el despliegue de la Operación Sodoma, las Fuerzas Militares logran la muerte del histórico líder militar y comandante del Bloque Oriental “Mono Jojoy”, y unos meses después, bajo la Operación Odiseo, se consigue dar de baja a “Alfonso Cano” –comandante jefe de la guerrilla tras la muerte por causas naturales en 2008, del histórico líder, “Manuel Marulanda” (Ríos, 2015)–.³

Algunos datos ilustrativos que redundan en el cambio de correlación de fuerzas en favor del Estado y en la superación del paradigma de “Estado fallido” al que se aproximaba Colombia (Mason, 2002; Rotberg, 2004) son los siguientes: entre 2002 y 2010 se destruyeron 20.062 laboratorios cocaleros, se incautaron 1.233 toneladas de marihuana,

³ Esta sucesión de golpes estratégicos se daría también en el ELN. Así, por ejemplo, entre 2009 y 2010 fueron dados de bajas algunos de los líderes de una importante estructura operativa en el norte de Tolima como fue el Frente Bolcheviques de Libano. De este modo se daría de baja a “Mauricio”, “Duván” y “Laín”.

5.3 toneladas de heroína y 1.269 toneladas de cocaína. Si en 2002 la superficie de coca era de 130.364 ha, en 2010 la superficie se había reducido a 58.073 ha (UNODC, 2011).

Igualmente, y cómo se verá con detalle a continuación, el número de guerrilleros de las FARC-EP y el ELN se reduce, aproximadamente, en un 60% y su presencia y control territorial cae a la mitad, sentándose las bases de una derrota estratégica e irreversible que conducirá a la negociación con las FARC-EP, y la apertura de diálogos con el ELN (Ríos, 2018).

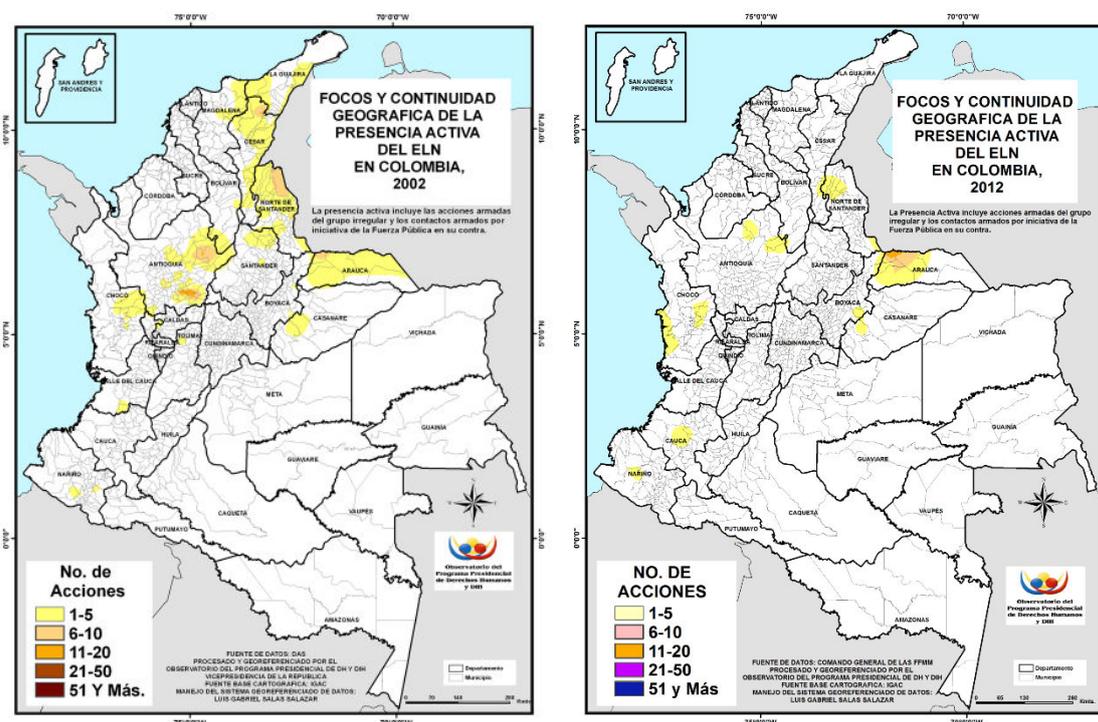
En cualquier caso, lo anterior no hubiera sido así de no haber existido en Colombia el fenómeno paramilitar, el cual mantuvo una importante proximidad a la PSD de los primeros años del gobierno de Álvaro Uribe.⁴ Como se apuntaba anteriormente, con un número de efectivos por encima de los 10.000, conseguirán desplazar a las FARC-EP y sobre todo al ELN de algunos de sus bastiones tradicionales (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2012).

En cualquier caso, producto de todo lo anterior es que se experimenta por parte de las guerrillas un doble proceso de periferalización y narcotización. Es decir, fruto de una mayor capacidad del Estado para confrontar con las FARC-EP y el ELN, estos grupos armados van reubicando sus diferentes frentes y bloques en escenarios alejados de los grandes centros decisorios del país. Enclaves en donde se aprecia una importante connotación fronteriza, una marcada impronta cocallera, pero, igualmente, una mayor debilidad institucional por parte del Estado. Razón ésta por la que el relativo éxito de la PSD habría que matizarlo a ciertos departamentos del país pues, particularmente, los escenarios del nororiente y el suroccidente colombianos agravan su situación de violencia entre 2008 y 2012 (Ríos, 2016a, Ríos, 2016, b).

A tal efecto, y con miras a comprender esta particular geografía de la violencia, el suroccidente del país se encuentra conformado por los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá, siendo un corredor de alto valor agregado para las FARC-EP, y muy especialmente para la presencia de su Bloque Sur y su Bloque Occidental. Caquetá fue siempre un departamento de altísima presencia guerrillera, especialmente en el oriente, por parte de los Frentes 14 y 15 que, durante toda la década pasada, controlaron prácticamente tres cuartas partes de los municipios y protagonizaron entre 2002 y 2012 hasta 621 acciones armadas (ODHDIH, s.f.) y con unos niveles de activismo inalterados durante los últimos años de la presidencia de Uribe.

⁴ Cuando el paramilitarismo ha contribuido al debilitamiento de las guerrillas y el Estado ha experimentado un profundo cambio favorable en la correlación de fuerzas, es que Álvaro Uribe inicia un proceso de diálogo y desmantelamiento de las estructuras paramilitares, en torno a la Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz.

Figura 4. Geografía de la presencia activa del ELN, 2002-2012

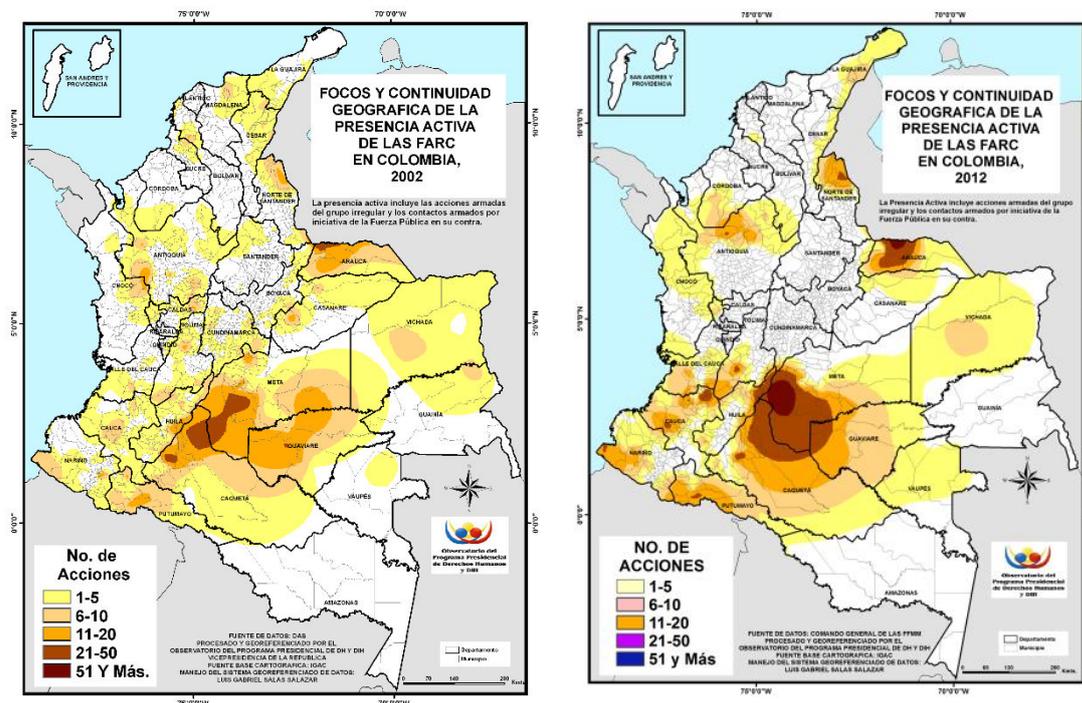


Fuente: ODHDIH (s.f.).

En Putumayo, la presencia de los Frentes 32, 48 y 62 afectaría, entre 2002 y 2012, a nueve de sus 12 municipios, de forma que se contabilizarían hasta 624 acciones, y sin atisbo de disminución (ODHDIH, s.f.). En lo que respectaría a Nariño, la presencia de las FARC-EP quedaba articulada en torno al poderoso Frente 29, protagonista por estos mismos años de hasta 848 acciones guerrilleras en una cuarta parte de los municipios nariñenses (ODHDIH, s.f.). Finalmente, el departamento de mayor beligerancia sería Cauca, en donde entre 2002 y 2012 se contabilizarían 1.255 acciones guerrilleras en 30 de los 42 municipios del departamento, y protagonizadas mayormente por los Frentes 8 y 60, en el sur del departamento, y por el Bloque Central en el nororiente. Lo anterior, haciendo valer una condición hegemónica con unos niveles de presencia y activismo estables cuando no crecientes a lo largo de toda la década (ODHDIH, s.f.).

Convendría añadir a lo expuesto que este escenario suroccidental se vio poco afectado por la presencia de un ELN ausente en Caquetá y Putumayo, y poco activo en los departamentos de Nariño y Cauca. En el caso de Nariño, muy debilitado por la confrontación con las FARC-EP hasta casi 2010. Sólo desde entonces se reorganiza en los municipios de Puerres, Ricaurte, Tumaco, Taminango y Túquerres, llegando a protagonizar 41 acciones armadas por parte del Frente Comuneros del Sur. En el caso de Cauca, la presencia de un Frente como el Manuel Vásquez Castaño, activo en torno a Popayán, recupera cierta notoriedad a partir de 2009, de manera que entre ese año y 2012 protagoniza 19 acciones armadas, aunque con una intensidad nada comparable a su activismo de finales de los 90 (ODHDIH, s.f.).

Figura 5. Geografía de la presencia activa de las FARC-EP, 2002-2012



Fuente: ODHDIH (s.f.).

En el nororiente existe una mayor paridad entre la presencia de FARC-EP y ELN. En el caso de Norte de Santander, el Frente 33 de las FARC-EP habría sido protagonista, entre 2002 y 2012, de 444 acciones guerrilleras, casi todas ellas en la región del Catatumbo en torno a los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y, sobre todo, Tibú (ODHDIH, s.f.). Igualmente, el ELN, tras varios años de repliegue de sus Frentes Carlos Armando Cauca Guerrero y Juan Fernando Porras, y resultado del impacto del paramilitarismo y la preponderancia de las FARC-EP, entre 2007 y 2012 consigue recomponerse y protagonizar 71 acciones guerrilleras, también focalizadas, casi en su totalidad, en el Catatumbo (ODHDIH, s.f.).

Arauca, por su parte, fue un departamento en el que las FARC-EP y el ELN confrontaron durante casi toda la década pasada por la voluntad de las primeras de favorecer cultivos ilícitos frente a las reticencias del Frente Domingo Laín del ELN. No obstante, las FARC-EP entre 2002 y 2012 llegan a protagonizar, a través del Frente 10, hasta 524 acciones guerrilleras, mostrando una dinámica creciente en su activismo, principalmente, desde 2008 (ODHDIH, s.f.). Algo similar sucedería con un ELN recompuesto desde 2009 y que, a pesar de los envites de la PSD, recupera su presencia en casi todos los municipios del departamento, protagonizando 71 acciones guerrilleras entre 2009 y 2012 (ODHDIH, s.f.).

Finalmente, quedaría hacer referencia a Antioquia y Bolívar. En lo que respecta al primero, durante la primera década del 2000 las FARC-EP tuvieron presencia a través del Bloque José María Córdova y el Bloque Magdalena Medio, mientras que en Bolívar lo hicieron fundamentalmente a través del Bloque Caribe. En el caso del ELN, su activismo armado se condensó, aunque con suerte dispar a las FARC-EP, por medio

del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro (Medina, 2011). Entre 2002 y 2012 las FARC-EP protagonizaron 698 acciones, y aun con todo lo que supuso la PSD y los primeros años de presidencia de Juan Manuel Santos, entre 2009 y 2012 llegaron a desarrollar 273 acciones armadas (ODHDIH, s.f.). En lo que respecta a Bolívar, entre 2002 y 2012 alcanzan las 173 acciones si bien, fruto del impacto de los operativos de la fuerza pública y del paramilitarismo, para los años que transitan entre el fin de la presidencia de Uribe y el inicio de Santos, su activismo es muy reducido, con apenas 15 acciones (ODHDIH, s.f.). *Sensu contrario*, el ELN mantiene una posición casi inexistente en Antioquia. Baste recordar que las 99 acciones guerrilleras que llega a protagonizar en el año 2000 nada tienen que ver con las tres acciones que desarrollaría en 2012. Algo similar a la experiencia en el sur de Bolívar, de donde desaparecen en el año 2007 y cuya recomposición sólo llegará una vez iniciado el proceso de diálogo con las FARC-EP (ODHDIH, s.f.).

En conclusión, tanto el corredor suroccidental como el nororiental han sido los enclaves en donde la presencia guerrillera más se ha concentrado en los momentos previos al inicio del diálogo de paz con las FARC-EP. Este proceso de “periferalización”, en todo caso, ha de entenderse no tanto como una nueva apropiación de espacios fronterizos desde los que dar continuidad al conflicto armado por parte de las guerrillas, y sí más como la intensificación irresoluta de la violencia, habida cuenta de su debilitamiento en otros escenarios de la geografía colombiana.

De este modo, si en los departamentos del suroccidente las FARC-EP, hacia el año 2002, tenían presencia en 63 municipios en los que protagonizarían 229 acciones armadas, 10 años después su presencia se mantiene estable, con 71 municipios y 368 acciones guerrilleras (ODHDIH, s.f.). En el caso del ELN la proporción es menor, pues en 2002 su presencia se reducía a sólo seis municipios de Nariño en los que protagonizó seis acciones guerrilleras. Una década después llevaría a cabo siete acciones guerrilleras en siete municipios de Cauca y nueve acciones guerrilleras en ocho municipios de Nariño (ODHDIH, s.f.).

Por su parte, en el nororiente, las FARC-EP en el año 2002 tenían presencia en 13 municipios, en los que desplegó un total de 105 acciones armadas. Una década después su presencia asciende a 18 municipios y 131 acciones armadas. Algo similar a lo que acontece con un ELN presente en 14 municipios y protagonista de 46 acciones armadas en 2002, y que una década después mantiene su activismo en 11 municipios en donde despliega hasta 40 acciones armadas (ODHDIH, s.f.).

4. Poniendo en valor la tesis de la narcotización del activismo guerrillero: la violencia guerrillera durante el Acuerdo de Paz con las FARC-EP

De acuerdo con el proceso anteriormente descrito, entre 2002 y 2012, las FARC-EP han reducido su presencia territorial de 346 a 190 municipios y el ELN ha hecho lo mismo, de 65 a 31 municipios (ODHDIH, s.f.). Igualmente, las FARC-EP han perdido notablemente su capacidad de combate al pasar de 18.000 a 9.000 efectivos y el ELN de 5.500 a 1.800 (Ríos, 2017). Podría entenderse este momento como un punto de verdadera madurez en el ciclo de violencia colombiano en tanto que el conflicto armado

pareciera tornar hacia una situación mutuamente desfavorable para Estado y guerrilla, y que Zartman y Touval (1985) han denominado como “estancamiento doloroso” (*mutually hurting stalemate*). Así, mientras las FARC-EP y el ELN han sido profundamente debilitadas, e incluso derrotadas estratégicamente –que no militarmente (Echandía y Cabrera, 2018)– el Estado, pese a los esfuerzos de la PSD y los iniciales embistes de la política de seguridad de Juan Manuel Santos, no ha conseguido minimizar el arraigo guerrillero sobre ciertas regiones. Esta situación distinta, tal vez, es que explicaría por qué las FARC-EP, a diferencia del proceso del Caguán, asumen un verdadero compromiso de diálogo, y por qué el ELN comienza los contactos previos con vistas a constituir una mesa de negociación (González Muñoz, 2015).

Durante los primeros años en los que transcurre el diálogo de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos no se hicieron públicos los reportes del activismo guerrillero, arguyéndose que ello podía afectar negativamente a los intereses de la negociación, dado que ésta acontecía sin un cese al fuego por ambas partes. Sin embargo, para el año 2015 sí que se pudieron consultar las cifras del ODHDIH, y un hecho llama poderosamente la atención es la reducción muy sustancial tanto del activismo guerrillero de las FARC-EP como del ELN. Si la primera guerrilla, en 2012, había cometido un total de 824 acciones armadas, en 2015 apenas registraba 94. Asimismo, las 71 acciones del ELN en 2012 decaían a 28 en 2015 (ODHDIH, s.f.). Sea como fuere, una mirada territorial del tipo de violencia no hace sino reforzar la hipótesis de la “periferialización” y de la “narcotización”, ampliada a continuación. Esto, en la medida en que, sobre un total de 122 acciones guerrilleras, casi el 80% se condensan en cinco departamentos: Antioquia, Arauca, Cauca, Nariño y Norte de Santander. Cinco departamentos que conectan con las lógicas territoriales de la violencia abordadas en el apartado anterior.

Figura 6. Desglose departamental de las acciones guerrilleras, 2015

Departamento		Departamento	
Antioquia	22	Guaviare	4
Arauca	18	Huila	2
Bolívar	5	Meta	3
Boyacá	1	Nariño	16
Caquetá	2	Norte de Santander	20
Cauca	20	Putumayo	6
César	1	Valle del Cauca	1
Total	122		

Fuente: (ODHDIH, s.f.)

La “periferialización” que ya se observaba en 2012, de acuerdo con la información que se recoge en la Figura 6, se mantiene en 2015, de acuerdo con cómo se distribuye la presencia de grupos guerrilleros en la región. En todos los municipios de Arauca, con la

excepción de Cravo Norte y Puerto Rondón, y en casi todos los de la región del Catatumbo, se puede apreciar presencia del ELN. Igual sucedería con las FARC-EP, pues, aunque sus niveles de violencia guerrillera se reducen sustancialmente en el marco que supone el diálogo de paz, se evidencia presencia activa tanto en cinco de los siete municipios de Arauca como en buena parte del Catatumbo en Norte de Santander (ODHDIH, s.f.).

Figura 7. Acciones guerrilleras de FARC y ELN en 2012 y 2015 (Norte de Santander y Arauca)

Departamento de Norte de Santander					Departamento de Arauca				
	FARC 2012	ELN 2012	FARC 2015	ELN 2015		FARC 2012	ELN 2012	FARC 2015	ELN 2015
Bucarasica	1				Arauca	4	2	1	1
Convención	8	2			Arauquita	29	5	1	1
Cúcuta			1		Cravo Norte	1			
El Carmen	6	2	1		Fortul	2	5		2
El Tarra	16	4	2	2	Puerto Rondón	2		1	
Hacarí	3		3		Saravena	2	14	3	5
La Playa				1	Tame	17	2	2	1
Ocaña	1	1		1					
Pamplona	1								
San Calixto	2	1	2	4					
Sardinata	2		1						
Teorama	11	1	1						
Tibú	23		1	1					

Fuente: (ODHDIH, s.f.)

Un segundo escenario periférico, que concentra gran proporción del activismo guerrillero en 2015, pero que igualmente evidencia una importante reducción de la violencia con respecto a 2012, es el suroccidente del país, sobre todo, Nariño y Cauca y, en menor medida, Putumayo. Como se señalaba anteriormente, Cauca y Putumayo fueron tradicionales bastiones de la guerrilla desde los 90, mientras que Nariño se erigió como retaguardia, si bien para el año 2015 era el segundo departamento más importante para las FARC-EP (Echandía y Cabrera, 2017). Esto, por encontrarse en uno de los lugares más recónditos de la geografía colombiana y acoger, desde una posición de corredor estratégico, la consolidación del poderoso Bloque Sur.

La presencia de las FARC-EP en Cauca se organizaba en torno a los Frentes 6 y 8, en el norte y sur, respectivamente, junto al Frente 29 en Nariño y los Frentes 32, 48 y 63, en el Bajo Putumayo, también mencionados con anterioridad. De igual manera, el ELN había mantenido una presencia muy minoritaria, primero en Cauca, en las inmediaciones de la capital, Popayán y a través del el Frente “Manuel Vásquez Castaño”, y después en Nariño, compartiendo actuación con las FARC-EP, por medio del Frente “Comuneros del Sur” (Echandía y Cabrera, 2017).

Figura 8. Acciones guerrilleras de FARC y ELN en 2012 y 2015. (Cauca, Caquetá, Nariño, Putumayo)

Departamento de Cauca				Departamento de Nariño					
	FARC 2012	ELN 2012	FARC 2015	ELN 2015		FARC 2012	ELN 2012	FARC 2015	ELN 2015
Argelia	28		4	1	Barbacoas	8	1	1	
Balboa	5				Córdoba			1	
Bolívar		1			Cumbitara			2	
Buenos Aires			1		El Charco	2			
Cajibío	8		2		El Tambo	1			
Caldono	3				El Rosario			1	
Caloto	12				Guaitarilla		1		
Corinto	15				Imués	1			
El Tambo	9				Ipiales	3	1		
Guachené	1				La Cruz	1			
Guapi	3		1		La Florida		1		
Inzá	2				La Tola			1	
Jambaló	7		1		La Llanada	1			
La Sierra	1				Leiva	1		1	
López			4		Linares	1			
Mercaderes	1	1			Maguî	1		2	
Miranda	6				Mallama	6		1	
Morales	4				Olaya	2			

Departamento de Cauca					Departamento de Nariño				
	FARC 2012	ELN 2012	FARC 2015	ELN 2015		FARC 2012	ELN 2012	FARC 2015	ELN 2015
Padilla	1				Pasto	1			
Paez	2				Providencia			1	
Patía	6				Puerres	2			
Piendamó	4				Ricaurte	8			
Popayán	3	1			R. Payán	2		1	
Puerto Tejada	2				Samaniego	5			
Puracé		1			Tumaco	17		3	1
San Sebastián			2		Sandoná	1			
Santa Rosa			1		S. Bárbara	1			
Santander de Quilichao	7				Santa Cruz	4			
Silvia	1				Taminango	1			
Suárez	4		1		Túquerres	3			
Timbío	3		1						
Timbiquí	7								
Toribio	11		2						
Totoró	3								
Villa Rica	2								

Departamento de Caquetá				Departamento de Putumayo					
	FARC 2012	ELN 2012	FARC 2015	ELN 2015		FARC 2012	ELN 2012	FARC 2015	ELN 2015
Milán	7		1		Leguízamo	2			
Solita	1		1		Mocoa	1		2	
					Orito	18			
					Puerto Asís	14			
					Puerto Caicedo	2			
					Puerto Guzmán	1		1	
					San Miguel	18			
					Valle del Guamuez	13		2	
					Villagarzón	1		1	

Fuente: (ODHDIH, s.f.).

Es así como esta región del país –a la que se suma el occidente de Caquetá– para el año 2015 es el enclave más notorio de violencia para las FARC-EP, aunque, como sucediera en el nororiente, y también con el ELN, sus niveles de activismo con respecto a 2012 resultan mucho menores. En cualquier caso, se aprecia una relativa continuidad territorial, al registrarse activismo de las FARC-EP en 10 municipios de Cauca, ocho de Nariño, dos del occidente de Caquetá y cuatro de Putumayo. Esto es, 24 municipios que concentrarían un tercio del total de las acciones guerrilleras contabilizadas en 2015 (ODHDIH, s.f.).

Finalmente, un tercer escenario de presencia guerrillera, de menor relevancia, sería el conformado por Bolívar y Antioquia, en su región limítrofe con el río Magdalena. Antioquia, durante años, se ha tratado de uno de los departamentos más violentos del país, también, por el arraigo del proyecto paramilitar (Reyes, 2009). Así, y a pesar de que el número de acciones cayó muy sustancialmente desde 2012, en 2015 seguía siendo el departamento más activo para las FARC-EP. Esto, al concentrarse la mayor parte de sus acciones, tanto la región septentrional, por la presencia de los Frentes 4 y 24, como, en menor medida, por los Frentes 18 y 5, del noroccidente. También, se registraría presencia del Frente “Alfonso Gómez Quiñónez” del ELN en el Magdalena Medio bolivarense, tal y como recoge la siguiente Figura 9 (Medina, 2011).

Es de esta manera que la “periferialización” debe entenderse como un proceso paulatino, consolidado incluso durante los años de vigencia del diálogo de paz con las FARC-EP, pues entre 2012 y 2015, y a pesar de la notable reducción de la violencia

armada, los tres escenarios descritos continuaron presentando niveles de activismo, en ocasiones alejados de la tendencia general de cese de hostilidades, especialmente, con las FARC-EP.

Resulta concluyente el hecho de que, tanto para aquella guerrilla como para el ELN, 9 de cada 10 acciones guerrilleras acontecidas en 2015 fueron dadas en estos escenarios, lo que intensifica la dinámica de “periferialización” con respecto a 2012 (ODHDIH, s.f.). Expresado de otro modo, de las 824 acciones armadas cometidas por las FARC-EP aquel año, 538 se contabilizaron en estas tres regiones (65,5%). De la misma forma lo hicieron 54 de las 71 acciones armadas del ELN (76,05%).

Si en 2012 había 283 acciones de las FARC-EP y 17 del ELN que habían sido cometidas fuera de estos tres escenarios de análisis, tres años después, de las 28 acciones atribuidas al ELN, sólo dos se habrían dado fuera de estos departamentos. Igualmente, de las 94 acciones de las FARC, 11 habrían tenido lugar en diferentes regiones a las tres mencionadas (ODHDIH, s.f.).

Figura 9. Acciones guerrilleras de FARC y ELN en 2012 y 2015 (Antioquia y Bolívar)

Departamento de Antioquia					Departamento de Bolívar				
	FARC 2012	ELN 2012	FARC 2015	ELN 2015		FARC 2012	ELN 2012	FARC 2015	ELN 2015
Angostura	2		2		Morales				2
Anorí	12		1		Norosí				1
Apartadó			1		San Pablo				2
Argelia	2								
Briceño	5								
Cáceres	5								
Caicedo	1								
Campamento	2		1						
Dabeiba	5								
El Bagre	2		2						
Gómez Plata	1								
Granada	1								
Ituango	9		2						
Medellín	1								

Departamento de Antioquia

	FARC 2012	ELN 2012	FARC 2015	ELN 2015
Murindó	4			
Mutatá	2		1	
Remedios	1		2	
Sabanalarga	2			
San Andrés de Cuerquía	7		1	
San Francisco	1			
San Pedro	1			
Segovia		3		
Tarazá	8			
Toledo	7		3	
Valdivia	10		3	
Yarumal	3		2	
Yondó	2		-	
Zaragoza			1	

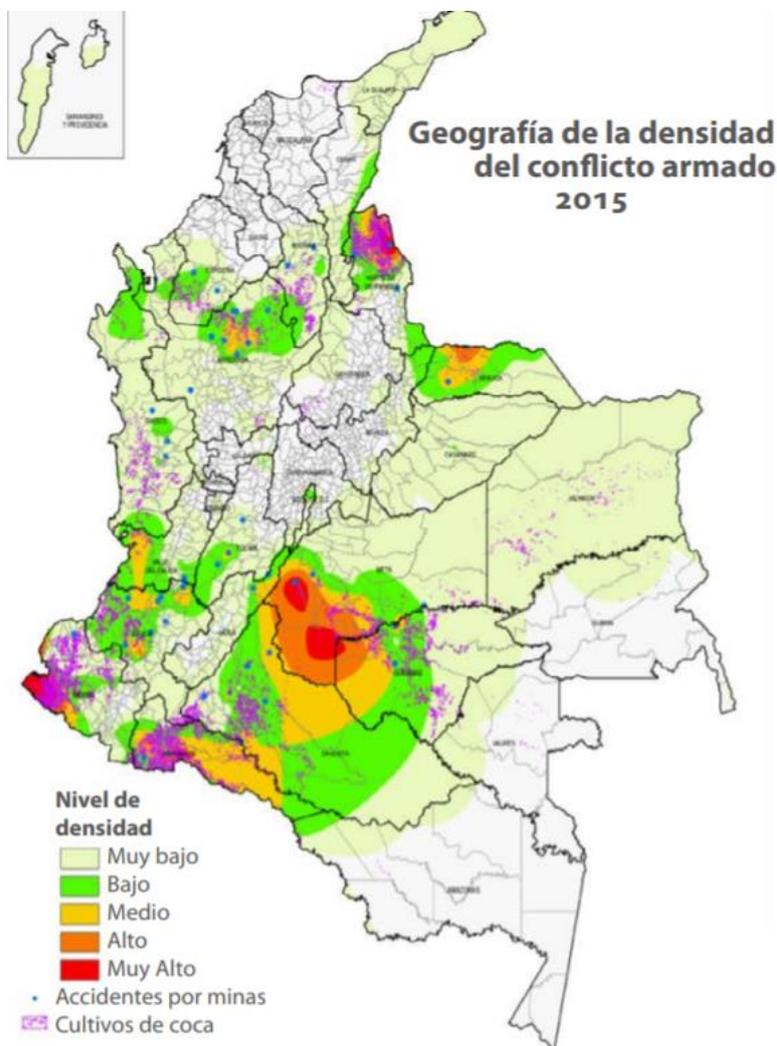
Fuente: (ODHDIH, s.f).

Como se apuntaba previamente, y a efectos de profundizar en la tesis de la “periferización”, lo que pareciera evidente, más allá de la concurrencia fronteriza que se presenta en nororiente y suroccidente, es que hay que enfatizar en la correspondencia de estos escenarios periféricos la presencia de cultivos y negocios cocaleros que, claramente, engrosan las finanzas de las guerrillas. Tradicionalmente, las fuentes de financiación de las guerrillas, hacia inicios de la década pasada, respondían a tres rubros básicos: secuestro, extorsión y narcotráfico.

Según Bejarano y Pizarro (2001), para las FARC-EP, del total de sus recursos, el 48% era proveniente del tráfico de drogas, el 36% de la extorsión, el 8% del secuestro, un 6% producto del robo de ganado más un 2% restante de actividades varias. Este análisis se aproximaría al desglose realizado, desde el Gobierno, por la Junta de Inteligencia Conjunta (JIC) (2005, p. 7). Ésta en su momento estimó que, en la distribución de los ingresos de las FARC-EP, el narcotráfico representaba un 46,44%, la extorsión un 41,31%, el secuestro un 6,75% y un 8,39% restante de actividades criminales varias. En definitiva, una valoración plausible que permitiría entender la importancia del

narcotráfico para una estructura guerrillera cuyos ingresos, hacia 2010, superaban los 500 millones de dólares y encontraban en la droga su primera fuente de ingresos (Henderson, 2010).

Figura 10. Geografía de la densidad del conflicto armado, 2015



Fuente: Salas (2016, p. 48).

En cuanto al ELN, Bejarano y Pizarro (2001) identificarían una estructura de ingresos bien distinta, de modo que un 60% provendría de la extorsión, un 28% del secuestro, un 6% del tráfico de drogas, un 4% del robo de ganado y, por último, un 2% de otro tipo de actividades criminales. No obstante, según señalan algunos trabajos, desde 2007 se apreciaría una mayor presencia de esta guerrilla en acontecimientos relacionados con el narcotráfico (International Crisis Group, 2007).

Sea como fuere, hacia 2015 se apreciaría que los ingresos provenientes del narcotráfico en las guerrillas, especialmente de las FARC-EP, resultarían mucho mayores en su proporción, principalmente como resultado de la notable reducción de la comisión de secuestros y casos de extorsión (Ríos, 2017). De los 70 municipios con algún tipo de activismo guerrillero en 2015, en 51 de ellos (72,85%) tuvieron alguna presencia de

cultivos cocaleros. Es más, la superficie cultivada de estos 51 municipios ascendería a las 47.000 ha (UNODC, 2016). Una cifra muy considerable si se tiene en consideración que la superficie total cultivada en Colombia, en el año 2013, fue de 48.000 ha (UNODC, 2016).

En segundo lugar, conviene señalar de qué modo la “narcotización” de la actividad guerrillera se focalizaría en las tres regiones protagonistas de este trabajo, pues como se puede observar en la Figura 11 de las 96.000 ha cocaleras reportadas por UNODC en 2016, un 84% coincide con departamentos en donde el arraigo guerrillero resulta mayor: Norte de Santander, Cauca, Caquetá, Nariño, Putumayo, Antioquia y Bolívar (UNODC, 2016).

Figura 11. Evolución de los cultivos cocaleros en Colombia, desglose municipal (2008-2015)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Variación 2014-15
Nariño	19.612	17.639	15.591	17.231	10.733	13.177	17.285	29.755	31%
Putumayo	9.658	5.633	4.795	9.951	6.148	7.667	13.609	20.068	21%
Norte de Santander	2.886	2.713	1.889	3.490	4.516	6.345	6.944	11.527	12%
Cauca	5.422	6.597	5.908	6.066	4.325	3.326	6.389	8.660	9%
Caquetá	4.303	3.985	2.578	3.327	3.695	4.322	6.542	7.712	8%
Guaviare	6.629	8.660	5.701	6.839	3.851	4.725	5.658	5.423	6%
Meta	5.525	4.469	3.008	3.040	2.699	2.898	5.042	5.002	5%
Antioquia	6.096	5.096	5.350	3.104	2.725	991	2.293	2.402	2%
Chocó	2.794	1.789	3.158	2.511	3.429	1.661	1.741	1.489	2%
Córdoba	1.710	3.113	3.889	1.088	1.046	439	560	1.363	1%
Bolívar	5.847	5.346	3.324	2.207	1.968	925	1.565	1.044	1%
Total	80.953	73.139	61.812	63.762	47.790	48.189	69.132	96.094	

Fuente: (UNODC, 2016, p. 17).

En conclusión, si se observa la relación entre presencia cocalera y guerrillera, los datos redundan en la hipótesis propuesta. Como se apuntaba con anterioridad, en 2012 de las 824 acciones guerrilleras de las FARC-EP, 518 tuvieron lugar en enclaves cocaleros. Asimismo, de los 190 municipios con presencia guerrillera, 90 presentaban cultivos de coca (ODHDIH, s.f.). Esta cercanía es igualmente observable en el ELN, pues de los 31 municipios con presencia guerrillera, 18 eran cocaleros, toda vez que del total de 71 acciones armadas 52 tuvieron lugar en escenarios con cultivos ilícitos (ODHDIH, s.f.). Observando lo ocurrido en 2015 no se aprecian cambios en este patrón, sino todo lo contrario. Más allá de la reducción de la violencia guerrillera en un plano general, de los 17 municipios con presencia armada del ELN, 13 era cocaleros. Igualmente, de sus 28 acciones armadas, 20 tuvieron lugar en municipios con presencia de este tipo de cultivos.

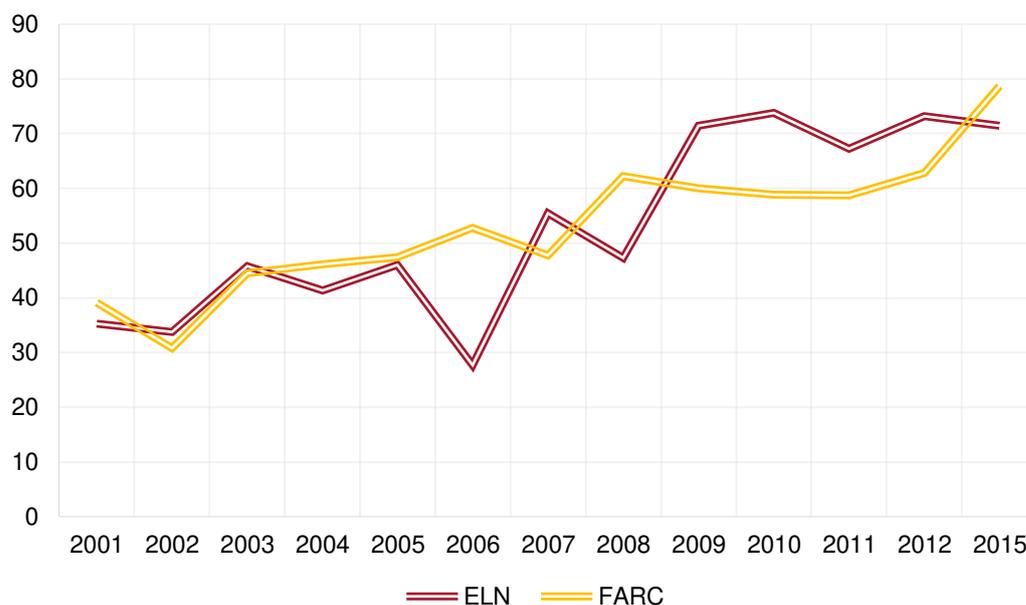
En lo que respecta a las FARC-EP, se observa idéntica tendencia. De las 94 acciones armadas cometidas en 2015, 74 se dieron bajo escenarios con cultivos de coca y de un total de 62 municipios con presencia de la guerrilla, en 47 de ellos se encontraron cultivos ilícitos (ODHDIH, s.f.).

Figura 12. Relación entre municipios con presencia guerrillera y cocalera, 2001-2015 (%)



Fuente: elaboración propia con base en los datos de UNODC y ODHDIH.

Figura 13: Relación entre acciones guerrilleras y presencia cocalera, 2001-2015 (%)



Fuente: elaboración propia con base en los datos de UNODC y el ODHDIH.

5. La violencia en Colombia tras el Acuerdo de Paz con las FARC-EP

La firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP llega, como se ha señalado en varios momentos de este trabajo, a finales de noviembre de 2016, si bien no carente de dificultades, especialmente por la derrota experimentada en el plebiscito de consulta que se realizó a inicios del mes de octubre y, muy especialmente, por la altísima polarización y encono político que éste produjo (Basset, 2018). En cualquier caso, Juan Manuel Santos recogió buena parte de las críticas de la oposición y consiguió impulsar, junto con las FARC-EP, un segundo Acuerdo que es el que actualmente se encuentra en proceso de implementación.

La llegada del candidato uribista tras las elecciones presidenciales de 2019 supone una dificultad añadida, pues durante todo el proceso de negociación, y especialmente, en sus compases finales, el mismo Álvaro Uribe, junto con otros sectores conservadores del país, lideraron la oposición frontal a la negociación con la guerrilla. Así, a las dificultades propias de un acuerdo de paz había que añadir un gobierno díscolo con el mismo, de manera que las resistencias y los incumplimientos no se hicieron esperar (Fundación Ideas para la Paz, 2018b).

A tal efecto, conviene destacar los reparos del presidente a la Jurisdicción Especial para la Paz, los impedimentos a reformar el sistema de representación para visibilizar políticamente a los territorios más afectados por la violencia, y la desfinanciación a la labor de la Comisión de la Verdad (Ríos, 2020). A pesar de todo, el proceso de desarme fue un éxito y se recogieron los niveles de entrega de armamento más altos en la historia

de un proceso de desarme.⁵ Y aun cuando en 2020 se mantiene un seguimiento al proceso de reincorporación de más del 95% de los exguerrilleros, han sucedido diferentes episodios de violencia criminal y política que han afectado sobremanera al correcto desarrollo de los compromisos recogidos en el Acuerdo de Paz (Ríos *et al.*, 2020).

Varios líderes de las extintas FARC-EP se desmarcaron del proceso de reincorporación y volvieron a la actividad armada (Rodríguez Pinzón, 2020). Asimismo, diferentes estructuras prosiguieron con las actividades delincuenciales y, a su vez, “enarbolando” la bandera revolucionaria de las FARC-EP. Como telón de fondo, los cultivos cocaleros y el negocio de la droga ha mantenido en los últimos años niveles estables, sin que se haya podido afectar a la producción cocalera, como preveía el Acuerdo (UNODC, 2020). Además, ni Policía ni Ejército, bien por falta de capacidades y recursos, bien por falta de voluntad política, han cooptado la geografía de la violencia, tal y como se esperaba también de lo comprometido con la guerrilla. Como ya se apuntó al inicio del trabajo, cabe pensar en que la Policía Nacional esperaba que en el inmediato “postconflicto armado”, fuese el Ejército quien ocupase el territorio y garantizase los primeros compases de transformación de la violencia. Por otro lado, el Ejército, considerando que el “postconflicto armado” implicaba un cambio en el paradigma de la seguridad pública, en favor de una seguridad ciudadana, entendía que dicha labor debía recaer, a diferencia del pasado, en la policía (Ríos, 2020).

El resultado es que tres años y medio después de la firma Acuerdo con las FARC-EP, la geografía de la violencia no sólo se mantiene irresoluta, sino que, además, se ha intensificado hasta el punto de los escenarios de reincorporación de guerrilleros y de mayor densidad cocalera superan los 50 homicidios violentos cada 100.000 habitantes (Nussio, 2020). La ausencia de superación de las condiciones estructurales, territoriales e institucionales de la violencia se suman al volumen ingente de recursos provenientes de las actividades ilícitas. Lo que fundamentalmente ha cambiado entonces pudiera ser que, si bien ausencia de la condición hegemónica de las FARC-EP ha desaparecido, a cambio, son diferentes grupos armados y estructuras criminales las que se disputan el control de los recursos ilícitos. Una disputa que se traduce en violencia y desplazamiento forzado, y que en estos tres años ha supuesto casi 200 exguerrilleros asesinados y más de 600 líderes activistas sociales (Indepaz, 2019).

A pesar de todo, el acceso a las cifras y bases de datos que podía ofrecer el ODHDIH ya no resulta posible. El oscurantismo torna difícil el poder disponer de las fuentes de información gubernamentales, más allá de los datos que ofrece la Policía Nacional y los reportes que aparecen en su publicación académica, la *Revista Criminalidad*. Es por ello por lo que esto obliga a recurrir a otras fuentes secundarias, como los informes y reportes de la Fundación Ideas para la Paz, Indepaz, la Fundación Paz y Reconciliación y el *Kroc Institute*.

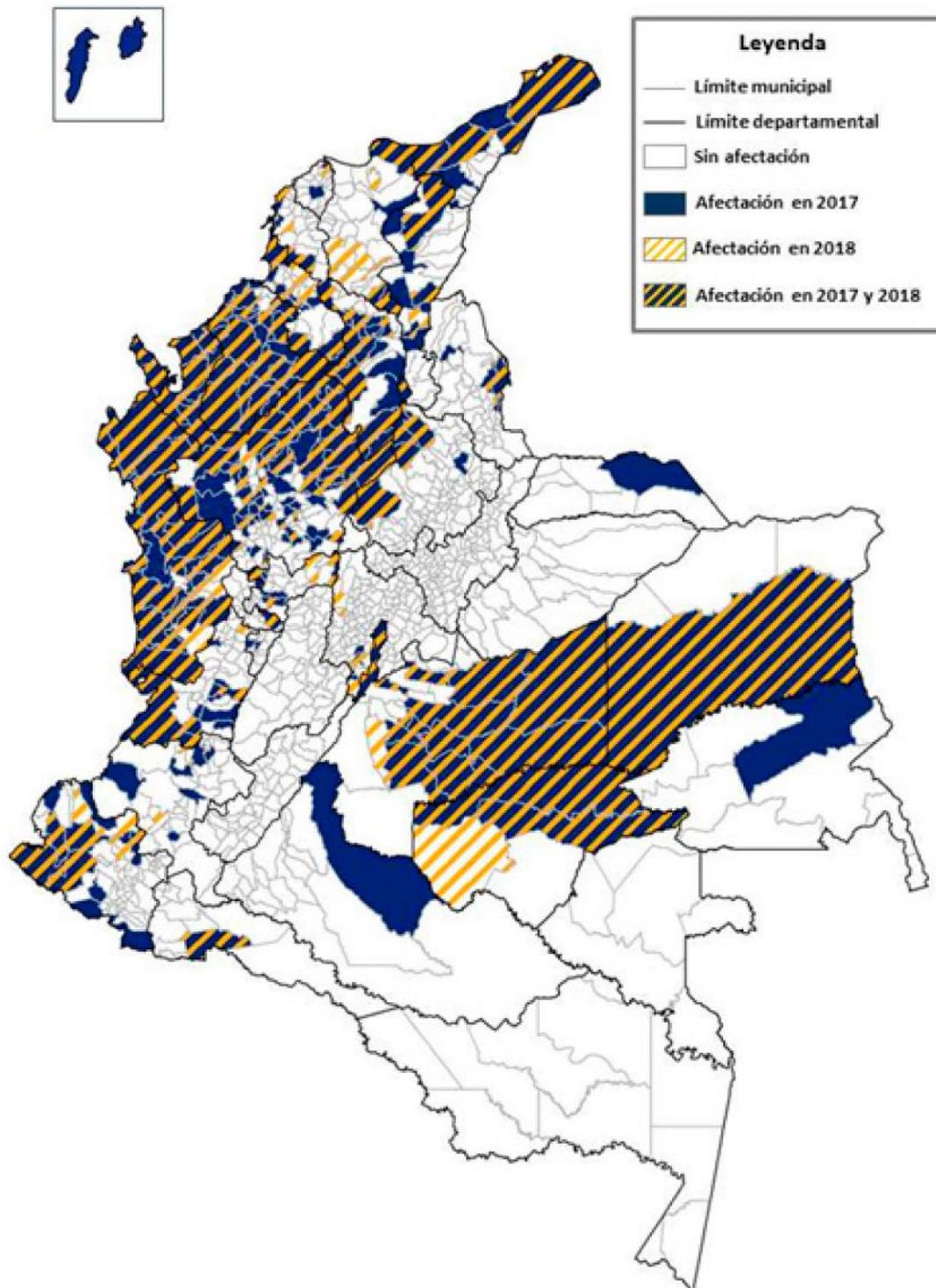
⁵ En Afganistán se entregó un promedio total de 0.76 armas por combatiente desmovilizado mientras que en Colombia esa ratio se eleva a 1,3 (Fundación Paz y Reconciliación, 2019b).

5.1. La expansión de los grupos post-paramilitares

El fenómeno post-paramilitar se inicia, fundamentalmente, a partir del año 2008. En ese momento ha finalizado el proceso de desmovilización paramilitar de las Ley 975 de 2005 y producto de la continuidad de las lógicas de la violencia, tiene lugar un proceso de reagrupación de nuevas estructuras armadas que, en muchas ocasiones, son lideradas por mandos medios y algunos nombres destacados que no se desmovilizaron, y que comienzan a delinquir en los mismos escenarios en donde tuvo lugar el fenómeno paramilitar. Ello, aun cuando la mayoría de los paramilitares desmovilizados en su conjunto no retornaron a la actividad criminal (Kaplan y Nussio, 2018).

Dando por válidas las cifras de Indepaz (2019), el proyecto criminal heredero del paramilitarismo llega a su cénit entre 2010 y 2011, cuando afecta a casi 400 municipios del país. En la actualidad esa cifra se habría reducido, aproximadamente a 250 y, con especial relevancia en 100 municipios de la región del Caribe. No obstante, el Ministerio de Defensa (2017) en 2011 contabilizaba siete estructuras que integraban a algo más de 4.100 efectivos, toda vez que en la actualidad es posible encontrar un número mucho mayor de grupos –casi una veintena– para un total de 3.000 integrantes.

Figura 14. Presencia territorial del Clan del Golfo, 2017 y 2018



Fuente: INDEPAZ (2018, p. 38).

De entre estas estructuras destacan las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Cuentan con aproximadamente 1.800 integrantes, y son herederas del otrora Bloque Élder Cárdenas. El gobierno se refiere a ellas como Clan del Golfo, y guarda

una conexión directa con el negocio de la droga pues colabora activamente con el cártel de Sinaloa. A pesar de su relevancia como estructura armada, ha recibido importantes operativos por parte de la Policía Nacional, tal y como sucedió con las operaciones Agamenón I y Agamenón II (García Perilla y Herrera, 2020).

Igualmente, este Clan del Golfo ha venido experimentando entre 2017 y 2020 un proceso de atomización, alimentado por los intereses locales del tráfico de drogas y por las ventajas de expansión que ofrece la desmovilización de las FARC-EP (Aristizábal, 2018). De la misma manera, en los últimos años se han acentuado enfrentamientos entre diferentes grupos criminales, tal y como ha sucedido con Los Pachencas en la pugna por controlar los puertos de Barranquilla y Cartagena. En la región del Bajo Cauca y en el norte de Antioquia, el Clan del Golfo ha venido confrontando con Los Caparrapos y con estructuras del ELN, vinculadas con la minería ilícita. En la región nororiental, se disputan la hegemonía con esta misma guerrilla, la cual ha ganado presencia tras la desaparición del Frente 33 de las FARC-EP, y pareciera que existen vínculos con el EPL en la región del Catatumbo, en donde también se han enfrentado a Los Rastrojos (Fundación Ideas para la Paz, 2019).

Por último, queda apreciar un importante proceso de expansión territorial en la región de los Llanos Orientales, y particularmente en ciertos enclaves en donde operó el Bloque Oriental de las FARC-EP, en Meta, Guaviare, Casanare o Vichada. Algo similar sucede en Nariño, en donde se enfrentan a estructuras heredadas del Frente 29 de las FARC-EP por el negocio cocalero, y en Chocó, en donde entre 2018 y 2020 ha habido enfrentamientos con el ELN por intereses asociados a la explotación maderera y el tráfico de drogas –si bien, igualmente, se han conocido alianzas puntuales con el ELN por preservar el negocio aurífero sobre Río Quito.

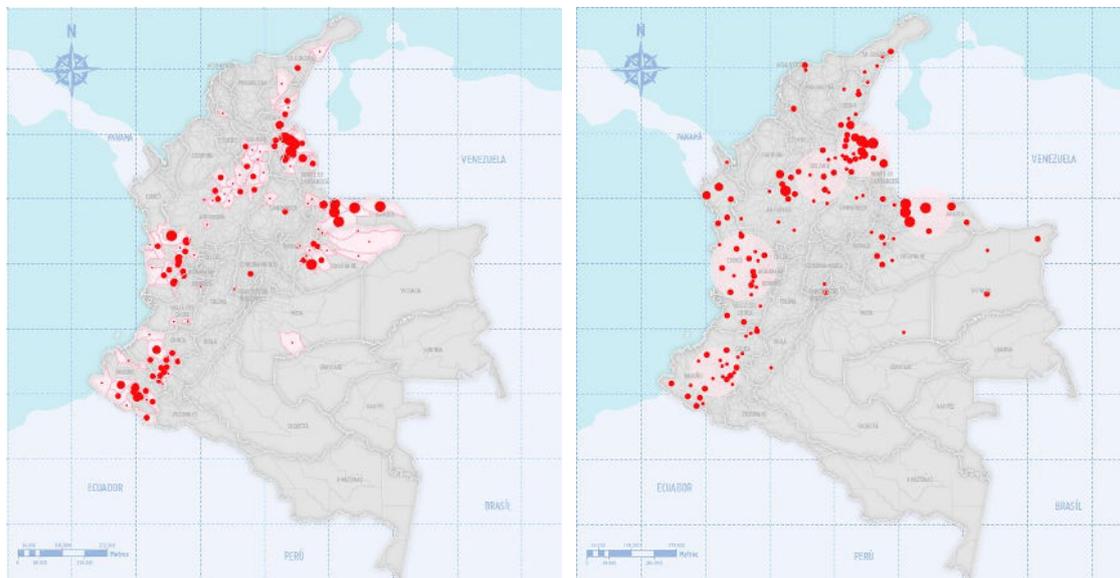
5.2. El ELN se recompone tras la desaparición de las FARC-EP

El abandono de las armas de buena parte de las FARC-EP ha ofrecido importantes beneficios para el ELN. En primer lugar, le ha favorecido el consolidarse como actor hegemónico local en la región nororiental, y especialmente, en torno a Norte de Santander y Arauca. El primero de ellos ofrece importantes réditos por el negocio de la droga mientras que el segundo le ofrece recursos provenientes del negocio extorsivo en torno al oleoducto Caño Limón-Coveñas, pero también ingentes beneficios provenientes del contrabando con Venezuela (Ríos, 2017).

Además, en los últimos dos años el ELN ha optado por replegarse en suelo venezolano. Hay voces que llegan a afirmar que existen connivencias con el sistema de inteligencia venezolano o con los mandos locales de la Guardia Nacional Bolivariana. A falta de que eso resulte cierto o no, lo que sí resulta presumible es que el oportunismo local y la coyuntura marca el sentido y alcance de estas posibles relaciones, tal y como sucede, en territorio colombiano, cuando el ELN colabora o se enfrenta con otras estructuras armadas en función de las necesidades del momento (Ríos, 2020). Aparte, estaría la hipótesis de que el ELN puede ser un atractivo socio informal para los intereses del gobierno de Nicolás Maduro, pues los departamentos de la frontera con Colombia, como son Táchira o Apure, son de marcada impronta opositora, de forma que el ELN pudiera

erigirse como potencial aliado en caso de un escalamiento del conflicto con ciertas regiones del país.

Figura 15. Presencia territorial del ELN comparando los períodos 2011-2014 y 2015-2018



Fuente: Fundación Ideas para la Paz (2020, pp. 12-15).

Su estructura, en la actualidad, se aproximaría a los 3.000 efectivos, lo que equivale a un 60% más que hace 10 años, si bien se desconoce cuántos exintegrantes o afines de las FARC-EP directamente habrían pasado a nutrir las filas del ELN. Sea como fuere, la desmovilización de las FARC-EP le ha permitido a este grupo armado ganar peso específico en algunos enclaves de Antioquia, el sur de Bolívar y el litoral Pacífico –en donde su presencia municipal, recuérdese, se reducía a una decena de municipios–. Por otra parte, su activismo ha crecido en algunos departamentos de la región Caribe, como da buena muestra el atentado cometido en Barranquilla contra un puesto de policía, en febrero de 2017, y que se suma a otras acciones transcurridas en 2018 y 2019 (Fundación Ideas para la Paz, 2020).

Quedaría decir que sus mayores hostilidades hoy en día se dan en Norte de Santander, frente a Los Rastrojos, Clan del Golfo y EPL, y en Chocó, Nariño y Cauca, en donde sus principales enemigos son estos mismos grupos post-paramilitares y pequeños cárteles narcotraficantes que operan en la región.

5.3. El EPL consigue salir de la región del Catatumbo

El EPL es denominado vulgarmente por parte del gobierno como el grupo criminal de Los Pelusos, aunque esta estructura se (auto)reconoce como heredera de la lucha insurgente de la primigenia guerrilla maoísta surgida en 1967. Resultado de la Directiva 015 de 2016, el gobierno desposeyó al EPL de cualquier atributo guerrillero y lo considera un grupo armado organizado. Tras la desmovilización de 1991 de buena parte de su estructura, unos 200 combatientes se mantuvieron díscolos frente a cualquier proceso desmovilizador, reubicando su presencia territorial a la región del Catatumbo,

de alta densidad cocalera, geografía hostil y condición fronteriza (Human Rights Watch, 2019).

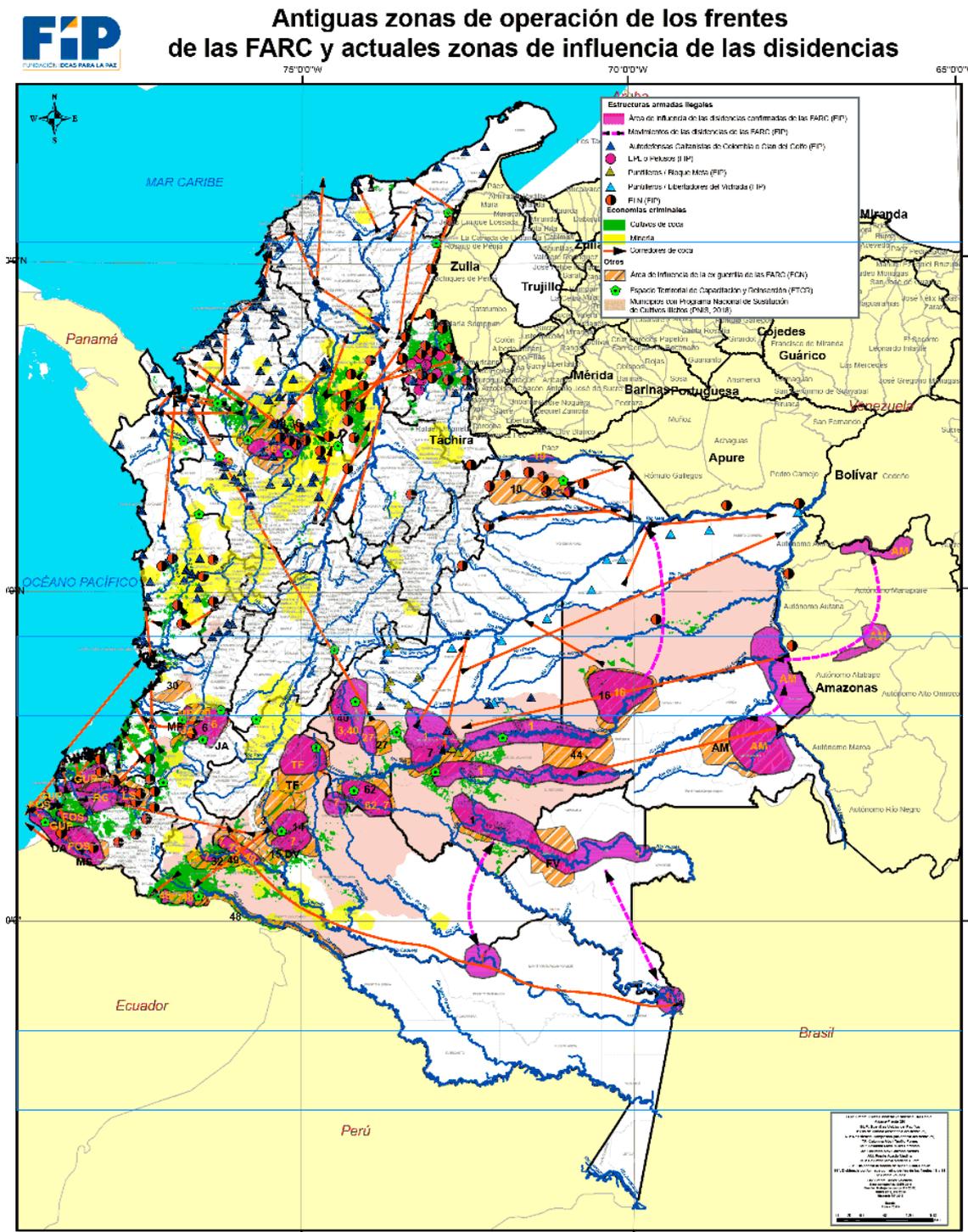
Desde el año 2015 han ganado presencia y capacidad operativa en municipios como El Tarra, Convención, Tibú, Sardinata, Hacarí, La Playa, San Calixto, Teorama o El Carmen. Desde entonces, y a pesar de que su último gran líder, Víctor Ramón Navarro, “Megateo”, fue dado de baja por el Ejército a inicios de octubre de 2015, ha conseguido incrementar tímidamente su número de efectivos y, lo más relevante, escapar de su limitado activismo en Norte de Santander (Ríos, 2017c). Es por ello por lo que, recientemente, se ha conocido de su presencia en municipios otrora controlados por el Frente 59 de las FARC-EP como Curumaní, Chimichaguas y Pailitas, en el departamento de Cesar, y también en parte de la serranía del Perijá –un corredor estratégico de alta importancia por unir La Guajira con el estado venezolano del Zulia–. Finalmente, se ha registrado igualmente activismo en el norte de Cauca, en municipios hace años controlados por las FARC-EP, como Corinto, Miranda, Suárez y Toribío, y en el Valle del Cauca, concretamente en Jamundí, en donde existen disputas con el ELN (Indepaz, 2018).

5.4. Disidencias y nuevas estructuras heredadas de las FARC-EP

Uno de los principales desafíos del Acuerdo de Paz ha sido la proliferación de estructuras criminales afines a las FARC-EP, ya sea porque no se desmovilizaron en su momento, como sucedió con el Frente 1 o el Frente 7, o porque han retomado dinámicas de violencia armada. Este fenómeno se aprecia en muchos escenarios con tradicional arraigo guerrillero. Al respecto, la Fundación Ideas para la Paz (2019) habla de 1.500 efectivos involucrados en estos grupos, Indepaz (2018) lo eleva a 2.500 integrantes y el Ministerio de Defensa aproxima la cifra a los cerca de los 3.000 miembros.

En todo caso, este remanente de actores y grupos armados relacionados con las FARC-EP debe ser matizado, sobre todo, porque la mayoría de los desmovilizados de un grupo armado tiende a proseguir en dicho proceso y no retorna a la actividad armada (Nussio, 2018; Ríos *et al.*, 2020). La mayoría de los casos que engrosan estos grupos armados resultan de nuevos reclutamientos; grupos armados que, además, se entienden a sí mismos como continuadores de las FARC-EP, a efectos de lograr mayor legitimación, aunque poco tengan que ver con aquella guerrilla, actuando bajo lógicas ambivalentes, marcadas por el plano local y la incursión en los mercados y réditos de la economía ilícita.

Figura 16. Área de influencia de disidencia de las FARC-EP (en morado), 2019



Fuente: Fundación Ideas para la Paz (2019).

La primera gran disidencia con el Acuerdo de Paz fue el tradicional Frente 7 de las FARC-EP, comandado por Miguel Botache, “Gentil Duarte”, y activo en Guaviare, Meta, Caquetá y Putumayo, en donde dispone de entre 300 y 500 efectivos. Igualmente, y sobre enclaves compartidos, se erige el antiguo Frente 1, presente en Guaviare, Meta y Caquetá, aunque con una vocación territorial hacia el Amazonas. Su estructura cuenta

entre 200 y 400 integrantes y su principal aspiración es controlar las rutas de salida del narcotráfico hacia Brasil y Venezuela (Indepaz, 2019). Tanto uno como otro son conocedores de la importancia del corredor oriental colombiano dentro del negocio de la droga, razón por la cual no han tenido problemas en construir alianzas con el Clan del Golfo. Igualmente, sobre el escenario amazónico se encuentra el Frente Acacio Medina, con algo más de 100 integrantes, y que opera entre Vichada y Guainía, colaborando en la cadena de procesamiento y distribución con el grupo Los Gorgojos y el Clan del Golfo, si bien estas tres estructuras, del mismo modo, han sufrido fracturas y disidencias a lo largo de todo 2019 (Indepaz, 2019).

De otra parte, hay otros grupos criminales herederos del Frente 29 y de la Columna Móvil Daniel Aldana de las FARC-EP, actualmente activos en Nariño, en donde las cifras le otorgan entre 120 y 500 integrantes (Indepaz, 2019). Buena parte de estos se han organizado últimamente en las llamadas Guerrillas Unidas del Pacífico, también conectadas con el cártel de Sinaloa y bandas criminales de Medellín, siendo su área de influencia el enclave cocalero que une Tumaco con las localidades del triángulo del río Telembí. Allí confrontan ELN, Clan del Golfo y estructuras herederas de las FARC-EP, como el Frente Óliver Sinisterra, que se encuentra formada por entre 300 y 500 integrantes, y que igualmente se enfrenta en Cauca con la Fuerza Unida del Pacífico – heredera del antiguo Frente 6 y que integran 400 efectivos (Noboa, 2019).

Hoy en día se cuentan por decenas las estructuras disidentes, aunque se aprecia un elemento clave. Los tres escenarios de mayor violencia heredera de las FARC-EP son Antioquia (y Córdoba), toda la región suroccidental –Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá– y el nororiente colombiano, especialmente Arauca y Norte de Santander. Es decir, los mismos enclaves abordados a lo largo de este trabajo y en donde mayor violencia guerrillera cabía apreciar, tanto en 2012 como en 2015.

En ningún caso es posible identificar un patrón único de colaboración, y son las particularidades locales, las relaciones entre liderazgos y las coyunturas del momento, las que marcan el patrón interpretativo de la violencia. Una violencia en la que el ELN pareciera buscar ser el actor hegemónico frente al Clan del Golfo, de manera que son las disidencias y grupúsculos criminales los actores bisagra que median entre estas estructuras, dada su necesidad por consolidar sus fuentes de financiación y proseguir en un escenario de violencia cada vez más atomizado, complejo e irresoluto (Álvarez *et al.* 2018).

Conclusiones

La geografía de la violencia producida por el conflicto armado interno colombiano ofrece importantes herramientas de análisis y comprensión. En otras cuestiones, para poder entender los anclajes territoriales de los diferentes grupos armados. En este trabajo, a tal efecto, se ha tratado de describir la evolución del conflicto armado en los últimos años con relación a dos cuestiones: la “periferalización” de la violencia y la notable relación de ésta con el negocio cocalero.

Durante los años de la presidencia de Álvaro Uribe, la puesta en marcha de la PSD unido al Plan Colombia optimizó la respuesta del Estado, de manera que su

fortalecimiento militar fue, a su vez, debilitando a las FARC-EP y al ELN. De este modo, tras ocho años de gobierno, tanto una guerrilla como la otra vieron reducida a más de la mitad su presencia territorial y su mínimo de efectivos.

Asimismo, la geografía de la violencia fue cambiando, de manera que entornos periféricos, especialmente en el nororiente y el suroccidente colombiano, se erigieron como los enclaves idóneos desde los que proseguir la “lucha armada”. De esta manera, a medida que el número de acciones guerrilleras se reducía en términos generales, se intensificaba y se concentraba en estos escenarios, lo cual, de algún modo, muestra un enquistamiento territorial del conflicto. Lo anterior, en la medida en que, en el nororiente y el suroccidente del país –además de la particular excepción de Antioquia– concurren entornos coccaleros, una débil presencia del Estado, la concurrencia fronteriza con Ecuador y Venezuela, y una geografía hostil, marcadamente selvático y/o montañosa.

Tal y como se observa en este trabajo, y producto de un análisis de cientos de miles de datos provenientes del archivo del ODHDIH, llevado a cabo durante los últimos años, es posible dar cuenta cómo la geografía de la violencia en Colombia, paulatinamente, se fue adaptando a nuevos enclaves y nuevas circunstancias, que hacían mucho más difícil la respuesta del Estado. Circunstancias que, igualmente, en un contexto de derrota estratégica de las guerrillas, permite entender cómo finalmente tuvo lugar el diálogo de paz con las FARC-EP y, del mismo modo, un intento paralelo, aunque finalmente frustrado, con el ELN.

Durante el proceso de paz, los lugares con mayor activismo armado de las guerrillas, aun cuando se aprecia una reducción muy notable de las hostilidades, siguió desarrollándose en estos escenarios periféricos. Escenarios en donde, una vez que las FARC-EP se desmovilizan, terminan siendo cooptados por otros grupos armados y estructuras criminales que actualmente se erigen como la principal amenaza para el Estado colombiano.

Si se observan las dinámicas territoriales, nuevamente, los elementos planteados en estas páginas permiten entender algunos de los rasgos de la actual violencia que acontece en el país. Una violencia en donde, en buena parte del departamento de Antioquia, el nororiente colombiano, y también en el suroccidente, concurren ELN, Los Pelusos, Clan del Golfo, disidencias de las FARC-EP y otros tantos grupos criminales que cooperan o se enfrentan, en función de los intereses inmediatos y las particularidades locales. Ello, dejando constancia cómo el negocio coccalero y la condición periférica –que lleva asociada a una menor presencia institucional del Estado– continúan tan vigentes como nunca. Sin embargo, con un añadido más, y es que la desideologización del conflicto que acompaña a la desmovilización de las FARC-EP ofrece mayores posibilidades para una lógica de alianzas y enemistades que no muestran un patrón claramente establecido, lo que alimenta una realidad mucho más compleja.

En cualquier caso, es posible explorar diferentes líneas de investigación con las que enriquecer este trabajo, ya sea tratando de analizar la renuencia del ELN a aceptar un escenario de diálogo, las variables territoriales que explican la ocurrencia de disidencias de las FARC-EP, o la manera en la que el Estado dirige o debe dirigir sus esfuerzos

para paliar un entorno de violencia que, hoy por hoy, es más preocupante, a tenor de sus cifras, del que tenía hace tan solo cinco años. Así, en todas ellas, y de acuerdo con lo sugerido en este trabajo, tanto la importancia de las economías ilícitas, especialmente, relacionadas con el narcotráfico, como las ventajas que a tal efecto confieren los escenarios periféricos -bajo importantes niveles de debilidad institucional y violencia estructural- siguen ocupando una posición explicativa central. Mientras que con toda seguridad buena parte de la mirada académica seguirá gravitando en torno a este tipo de análisis en los próximos años, resulta imprescindible que el Estado colombiano encuentre los instrumentos necesarios para una orientación distinta de sus políticas públicas y de su particular agenda de seguridad. Sólo de este modo puede avanzar en su firme propósito por reducir eficazmente las condiciones que, tras décadas de conflicto, aún hoy soportan la violencia y permiten que terceros grupos sigan disponiendo de elementos más que favorables para delinquir.

Referencias bibliográficas

Acemoglu, Daron, y James Robinson (2012), *Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza*, Ariel, Buenos Aires.

Agnew, John (1987), *Place and Politics: The Geographical Mediation of State and Society*, Allen and Unwin, Londres.

Álvarez, Eduardo, et al. (2018), *Trayectorias y dinámicas territoriales de las disidencias de las FARC*, Fundación Ideas para la Paz, Bogotá.

Aponte, David, y Andrés Vargas (2011), *No estamos condenados a la guerra. Hacia una estrategia de cierre del conflicto con el ELN*, CINEP, Bogotá.

Aristizábal, Ángela M^a, (2018). "Del individuo a la red: percepción de un Grupo Armado Organizado (GAO) colombiano desde la teoría de redes", *Revista Criminalidad*, vol. 60, n^o 1, pp. 111-131.

Arjona, Ana, et al. (2015), *Rebel Governance in Civil War*, Cambridge University Press, Cambridge.

Arjona, Ana (2016), *Rebelocracy. Social Order in the Colombian Civil War*, Cambridge University Press, Cambridge.

Ballvé, Teo (2019), "Narco-frontiers: a spatial framework for drug-fuelled accumulation", *Journal of Agrarian Change*, vol. 19, n^o 2, pp. 211-224.

Basedau, Matthias, y Jan Pierskalla (2013), "How ethnicity conditions the effect of oil and gas on civil conflict: a spatial analysis of Africa from 1990 to 2010", *Political Geography*, vol. 38, n^o 1, pp. 1-11.

Basset, Yann (2018), "Claves del rechazo del plebiscito para la paz en Colombia", *Estudios Políticos*, n^o 52, pp. 241-265.

Bejarano, Ana María, y Eduardo Pizarro (2003), "Colombia: the partial collapse of the state and the emergence of aspiring state-makers", en P. Kingston e I. Spears (eds.), *States Within States: Incipient Political Entities in the Post-Cold War Era*, Palgrave Macmillan.

Betancourt, Darío (1991), "Los cinco focos de la mafia colombiana (1968-1988). Elementos para una historia", *Revista Folios*, nº 2, pp. 13-30.

Bracanti, Dawn (2006), "Decentralization: fueling the fire or dampening the flames of ethnic conflict and secessionism?", *International Organization*, vol. 60, nº 3, pp. 651-685.

Buhaug, Halvard, y Jan Rød (2006), "Local determinants of African civil wars, 1970-2001", *Political Geography*, vol. 25, nº 3, pp. 315-335.

Cabrera, Irene, y Camilo Echandía (2019), "Retos institucionales y no institucionales para el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en las elecciones legislativas de 2018", *Estudios Políticos*, nº 56, pp. 92-121.

Cairo, Heriberto, y Jerónimo Ríos (2019), "Las élites políticas y la paz territorial en Colombia: un análisis de discurso en torno al Acuerdo de Paz", *Revista Española de Ciencia Política*, nº 50, pp. 91-113.

Cairo, Heriberto, *et al.* (2018), "Territorial peace": the emergence of a concept in Colombia's peace negotiations", *Geopolitics*, vol. 23, nº 2, pp. 464-488.

Cederman, Lars Erik, *et al.* (2013), "Transborder ethnic kin and civil war", *International Organization*, vol. 67, nº 2, pp. 389-410.

Centro Nacional de Memoria Histórica (2012), *Justicia y paz. Tierras y territorios en las versiones de los paramilitares*, CNMH, Bogotá.

Criado, Marcos (2017), *La paz en el territorio. Poder local y postconflicto en Colombia*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá.

Cunningham, David, *et al.* (2009), "It takes two: a dyadic analysis of civil war duration and outcome", *Journal of Conflict Resolution*, vol. 53, nº 4, pp. 570-593.

Echandía, Camilo, e Irene Cabrera (2018), *Madurez para la paz. Evolución de la territorialidad y las estrategias en el conflicto armado colombiano*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá.

Echandía, Camilo (1996), "La amapola en el marco de las economías de ciclo corto en Colombia", *Análisis Político*, pp. 3-19.

Echandía, Camilo (2006), *Dos décadas de escalamiento del conflicto armado en Colombia 1986-2006*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá.

Echandía, Camilo (2008), "El fin de la invulnerabilidad de las FARC. El estado actual del conflicto armado en Colombia", *Nueva Sociedad*, nº 217, pp. 4-13.

Echandía, Camilo (2013), "Auge y declive del ELN. Análisis de la evolución militar y territorial de cara a la negociación", *Informes de la Fundación Ideas para la Paz*, nº 21.

Estupiñán, Liliana (2018), "¿Es posible la paz territorial en Colombia? A propósito del Acuerdo Final de Paz entre Gobierno y Grupo FARC", *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, vol. 20, nº 1, pp. 127-142.

Fals Borda, Orlando, *et al.* (1962), *La violencia en Colombia*, Tercer Mundo, Bogotá.

Forø, Andreas, y Halvard Buhaug (2015), "Insurgency and inaccessibility", *International Studies Review*, nº 17, pp. 6-25.

Fundación Ideas para la Paz (2018a), *Siguiendo el conflicto*, FIP, Bogotá.

Fundación Ideas para la Paz (2018b), *Los primeros 100 días del presidente Duque: conflicto, acuerdo de paz y política de drogas*, FIP, Bogotá.

Fundación Ideas para la Paz (2019), *La fragilidad de la transición. La paz incompleta y la continuación de la confrontación armada*, FIP, Bogotá,
http://ideaspaz.org/media/website/FIP_FragilidadTransicion.pdf.

Fundación Ideas para la Paz (2020), *¿Qué hacer con el ELN? Opciones ante una derrota militar lejana y un diálogo improbable*, FIP, Bogotá,
http://ideaspaz.org/media/website/FIP_NE_QuehacerELN_Final.pdf.

Fundación Paz y Reconciliación (2019a), *Más sombras que luces. La seguridad en Colombia a un año de Iván Duque*, FPR, Bogotá.

Fundación Paz y Reconciliación (2019b), *Terminó la guerra. El postconflicto está en riesgo. Un año del Acuerdo de Paz*, FPR, Bogotá.

Galtung, Johan (1969), "Violence, peace and peace research", *Journal of Peace Research*, vol. 6, nº 3, pp. 167-191.

García de la Torre, Clara, y Clara Aramburo (2011), *Geografías de la guerra, el poder y la resistencia. Oriente y Urabá antioqueños, 1990-2008*, CINEP, Bogotá.

García Perilla, Juan C., y Ángela M^a Herrera (2020), "Los *spoilers* del Acuerdo de Paz en Colombia: el caso del Clan del Golfo", *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*, vol. 11, nº 1, pp. 204-233.

González, Fernán, *et al.* (2012), *Conflicto y territorio en el Oriente colombiano*, CINEP, Bogotá.

González Muñoz, Carlos A. (2015), "Diálogos de paz Gobierno-FARC-EP y las oportunidades para la paz en Colombia", *Estudios Políticos*, nº 46, pp. 243-261.

Hegre, Havard, *et al.* (2009), "Poverty and civil war events: a disaggregated study of Liberia", *Journal of Conflict Resolution*, vol. 53, nº 4, pp. 598-623.

Henderson, James D. (2010), *Víctima de la globalización. La historia de cómo el narcotráfico destruyó a Colombia*, Siglo del Hombre, Bogotá.

Horowitz, David (1985), *Ethnic Groups in Conflict*, California University Press, Berkeley.

Human Rights Watch (2019), *La guerra en el Catatumbo. Abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia*, HRW, Nueva York.

Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (2017), *El complejo paramilitar se transforma*, Indepaz, Bogotá.

Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (2018), *Conflictos armados focalizados. Informe sobre grupos armados ilegales Colombia 2017-2018*, Indepaz, Bogotá, <http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2018/12/ConflictosArmadosFocalizados-Indepaz-4.pdf>

Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (2019), *Todos los nombres. Todos los rostros. Informe de derechos humanos sobre la situación de líderes y defensores de derechos humanos en los territorios*, Indepaz, Bogotá.

Junta de Inteligencia Conjunta (2005), *Estimación de los ingresos y egresos de las FARC durante 2003*, Bogotá.

Kaplan, Oliver, y Enzo Nussio (2018), "Explaining recidivism of ex-combatants in Colombia", *Journal of Conflict Resolution*, vol. 62, nº 1, pp. 64-93.

Kroc Institute for International Peace Studies (2017), *Informe sobre el estado efectivo de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia*, Kroc Institute for International Peace Studies, Bogotá.

Kroc Institute for International Peace Studies (2019), *Informe 3. Hacia una paz de calidad en Colombia*, Kroc Institute for International Peace Studies, Bogotá.

Lederach, A. (2019), "Youth provoking peace: an intersectional approach to territorial peacebuilding in Colombia", *Peacebuilding*, en prensa.

Lemaitre, Julieta, y Esteban Restrepo (2019), "Law and violence in the Colombian post-conflict: state-making in the wake of the peace agreement", *Revista de Estudios Sociales*, nº 67, pp. 2-16.

Linke, Andrew, y John O'Loughlin (2015), "Reconceptualizing, measuring, and evaluating distance and context in the study of conflicts: using survey data from the North Caucasus of Russia", *International Studies Review*, n° 17, pp. 107-125.

Maher, David, y Andrew Thompson (2018), "A precarious peace? The threat of paramilitary violence to the peace process in Colombia", *Third World Quarterly*, vol. 39, n° 11, pp. 2142-2172.

Mason, Ann (2002), "Exclusividad, autoridad y Estado", *Análisis Político*, n° 47, pp. 55-75.

McDoom, Omar (2014), "Predicting violence within genocide: a model of elite competition and ethnic segregation from Rwanda", *Political Geography*, vol. 42, n° 1, pp. 34-45.

Medina Carlos (2011), *Las FARC-EP: flujos y reflujos. La guerra en las regiones*, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Mindefensa (Ministerio de Defensa Nacional) (2010), *Logros de la política de consolidación de la seguridad democrática*, Bogotá.

Mindefensa (Ministerio de Defensa Nacional) (2011), *Gasto en defensa y seguridad 1998-2011*, Bogotá.

Noboa, María F. (2019), "Inteligencia posnormal y prospectiva crítica: transdisciplina en la comprensión de amenazas híbridas en Ecuador. El caso del Frente Oliver Sinisterra (FOS)", *Congreso Análisis de Inteligencia y Prospectiva. Grupo de Estudios en Seguridad Internacional*, Universidad de Granada, 8-9/IV/2019.

Nussio, Enzo (2018), "Ex-combatants and violence in Colombia: are yesterday's villains today's principal threat?", *Third World Thematics: A TWQ Journal*, vol. 3, n° 1, pp. 135-152.

Nussio, Enzo (2020), "The Colombian trap: another partial peace", *CSS Analyses in Security Policy*, n° 258, pp. 1-4.

O'Loughlin, John (2012), "Climate variability and conflict risk in East Africa, 1990-2009", *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, vol. 45, n° 109, pp. 18344-18349.

Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (ODHDIH) (s.f.), *Síntesis de la violencia y la confrontación armada en Colombia, 1998-2012 y 2015*, Bogotá.

Observatorio Geopolítico de las Drogas (1996), *Informe anual. Geopolítica mundial de las drogas*, OGD, París.

Ocampo, Gloria Isabel (2014), *Poderes regionales, clientelismo y Estado*, CINEP, Bogotá.

Oquist, Paul (1978), *Violencia, conflicto y política en Colombia*, Instituto de Estudios Colombianos, Bogotá.

Pattie, Charles, y Ron Johnston (2000), "People who talk together vote together: an exploration of contextual effects in Great Britain", *Annals of the Association of American Geographers*, vol. 90, n° 1, pp. 41-66.

Pécaut, Daniel (2008), *Las FARC, ¿una guerrilla sin fin o sin fines?*, Norma, Bogotá.

Piña, Efrén (2012), *Entre la frontera del desarrollo y el desarrollo de la frontera*, CINEP, Bogotá.

Pissoat, Olivier, y Vincent Gouëset (2002), "La representación cartográfica de la violencia", *Análisis Político*, n° 45, pp. 3-33.

Pizarro, Eduardo (2011), *Las FARC (1949-2011). De guerrilla campesina a máquina de guerra*, Norma, Bogotá.

PNUD (2003), *Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia. El conflicto, callejón con salida*, Naciones Unidas, Nueva York.

Raleigh, Clionadh, y Havard Hegre (2009), "Population size, concentration and civil war: a geographically disaggregated analysis", *Political Geography*, vol. 28, n° 4, pp. 224-238.

Ramírez, William (1990), *Estado, violencia y democracia*, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Rangel, Alfredo, y Pedro Medellín (2010), *La política de seguridad democrática*, Norma, Bogotá.

Reyes, Alejandro, y Ana M^a Bejarano (1988), "Conflictos agrarios y luchas armadas en la Colombia contemporánea: una visión geográfica", *Análisis Político*, n° 5, pp. 6-27.

Reyes, Alejandro (1993), *Geografía de la violencia en Colombia. Informe de investigación*, IEPRI, Bogotá.

Reyes, Alejandro (2009), *Guerreros y campesinos. El despojo de la tierra en Colombia*, Norma, Bogotá.

Ríos, Jerónimo (2015), "Del Caguán a La Habana. Los diálogos de paz con las FARC en Colombia: una cuestión de correlación de fuerzas", *Revista de Estudios en Seguridad Internacional*, vol. 1, n° 1, pp. 63-83.

Ríos, Jerónimo (2016a), "Dinámicas de la violencia guerrillera en Colombia", *Revista de Ciencias Sociales*, vol. 22, n° 3, pp. 84-103.

Ríos, Jerónimo (2016b), "La narcotización del activismo guerrillero de las FARC y el ELN, 1998-2012", *Revista UNISCI*, nº 41, pp. 205-234.

Ríos, Jerónimo (2016c), "La periferialización del conflicto colombiano, 2002-2014", *Geopolítica(s)*, vol. 7, nº 2, pp. 251-275.

Ríos, Jerónimo (2017a), *Breve historia del conflicto armado en Colombia*, La Catarata, Madrid.

Ríos, Jerónimo (2017b), "Guerrilla y paramilitarismo en la región Caribe colombiana". *Temas Americanistas*, nº 39, pp. 87-112.

Ríos, Jerónimo (2017c), "Determinantes geográfico-políticos de la acción violenta guerrillera: un análisis de la concurrencia regional de guerrillas y paramilitares en el conflicto colombiano", *Revista Española de Ciencia Política*, nº 44, pp. 121-149.

Ríos, Jerónimo, y Egoitz Gago (2018), "Realidades y desafíos de la paz territorial en Colombia", *Papers. Revista de Sociología*, vol. 103, nº 2, pp. 281-302.

Ríos, Jerónimo (2018), "From war to peace: understanding the end of the armed conflict in Colombia", *Rationality and Society*, vol. 30, nº 4, pp. 463-490.

Ríos, Jerónimo, *et al.* (2019), "Departamentos de frontera y violencia periférica en Colombia", *Revista Criminalidad*, vol. 61, nº 2, pp. 113-132.

Ríos, Jerónimo (2020), "Consideraciones sobre el dividendo de paz en Colombia tras el Acuerdo con las FARC-EP", *América Latina Hoy*, nº 84.

Ríos, Jerónimo, *et al.* (2020), "Risk assessment analysis of attacks on FARC ex-combatants: towards a new evaluation model of probability", *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*, vol. 15, nº 1, pp. 44-63.

Rodríguez Cuadros, José Darío (2015), *Génesis, actores y dinámicas de la violencia política en el Pacífico nariñense*, CINEP, Bogotá.

Rodríguez Pinzón, Érika (2020), "La disidencia de las FARC y el futuro de la paz en Colombia", *Análisis de la Fundación Carolina*, nº 18, pp.1-15.

Ronderos, Teresa (2014), *Guerras recicladas. Una historia periodística del paramilitarismo en Colombia*, Aguilar, Bogotá.

Rotberg, Robert (2004), *When States Fail: Causes and Consequences*, Princeton University Press.

Salas, Luis G. (2010), "Corredores y territorios del conflicto armado colombiano: una prioridad en la geopolítica de los actores armados", *Perspectiva Geográfica*, nº 15, pp. 9-36.

Salas, Luis G. (2015), "Lógicas territoriales y relaciones de poder en el espacio de los actores armados: un aporte desde la geografía política al estudio de la violencia y el conflicto armado en Colombia, 1990-2012", *Cuadernos de Geografía*, vol. 24, nº 1, pp. 157-172.

Salas, Luis G. (2016). "Conflicto armado y configuración territorial: elementos para la consolidación de la paz en Colombia". *Bitácora*, 26, 45-57, http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0124-79132016000200005&script=sci_abstract&tlng=es.

Salas, Luis G., *et al.* (2019), "Towards violent peace? Territorial dynamics of violence in Tumaco (Colombia) before and after the demobilisation of the FARC-EP", *Conflict, Security & Development*, vol. 19, nº 5, pp. 497-520.

Saleyhan, Idean (2009), *Rebels Without Borders: State Boundaries, Transnational Opposition and Civil Conflict*, Cornell University Press, Nueva York.

Sánchez, Gonzalo ([1987]2009), *Colombia: violencia y democracia: Comisión de Estudios para la Violencia*, La Carreta, Bogotá.

Schutte, Sebastian, y Karsten Donnay (2014), "Matched wake analysis: finding causal relationships in spatiotemporal event data", *Political Geography*, vol. 41, nº 1, pp. 1-10.

Schutte, Sebastian (2015), "Geography, outcome and casualties: a unified model of insurgency", *Journal of Conflict Resolution*, vol. 59, nº 6, pp. 1101-1128.

Snyder, Richard (2006), "Does lootable wealth breed disorder?", *Comparative Political Studies*, vol. 8, nº 39, pp. 943-968.

Taylor, Peter, y Colin Flint (2002), *Geografía Política: sistema-mundo, Estado-nación y localidad*, Trama, Madrid.

Torres, María Clara (2011), *Estado y coca en la frontera colombiana. El caso de Putumayo*, CINEP, Bogotá.

Touval, Saadia, y William I. Zartman (1985), *International Mediation in Theory and Practice*, Westview, Boulder.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2013), *Colombia. Monitoreo de cultivos de coca 2012*, Viena.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2016), *Colombia. Monitoreo de cultivos de coca 2015*, Viena.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2019), *Colombia. Monitoreo de cultivos de coca 2018*, Viena.

Vásquez, Teófilo, *et al.* (2011), *Una vieja guerra en un nuevo contexto. Conflicto y territorio en el sur de Colombia*, CINEP, Bogotá.

Vélez, María (2001), "FARC-ELN: evolución y expansión territorial", *Desarrollo y Sociedad*, nº 47, pp. 151-225.

Zukerman, Sarah (2012), "Organizational legacies of violence: conditions favoring insurgency onset in Colombia, 1964-1984", *Journal of Peace Research*, vol. 49, nº 3, pp. 473-491.